



*¡Marcando el rumbo!*

## Juzgados de Mayor Riesgo: Análisis y Retos

Proyecto de Lineamientos de Política Económica, Social  
y de Seguridad 2011-2021

Guatemala, noviembre de 2019

Documento preparado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Su contenido (información, metodología, procesos y procedimientos) está sujeto a los respectivos derechos de autor. Cualquier reproducción del mismo, sea total o parcial, y sin importar el medio que se utilice para ello, requiere citar la fuente. Este documento fue elaborado por Corinne Dedik con el apoyo de Walter Menchú y Andrea Monterroso.

## CONTENIDO

<b>1. Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Antecedentes.....</b>	<b>4</b>
2.1. Creación de la competencia de mayor riesgo.....	8
2.2. Particularidades de la competencia de mayor riesgo en Guatemala.....	10
<b>3. Marco legal.....</b>	<b>14</b>
3.1. Código Procesal Penal.....	14
3.2. Competencia de mayor riesgo .....	16
3.3. Aplicación del derecho procesal ordinario .....	17
3.4. Ley contra la delincuencia organizada.....	17
<b>4. Los procesos de mayor riesgo en números.....</b>	<b>18</b>
4.1. Cantidad de casos.....	18
4.2. Expedientes en los que se tomó alguna decisión.....	20
4.3. Cantidad de sindicados por juzgado y prisión preventiva .....	22
4.4. Tipo de delitos.....	25
<b>5. Aspectos de los procesos de mayor riesgo .....</b>	<b>32</b>
5.1. Uso de la competencia de mayor riesgo.....	33
5.2. Prisión provisional .....	35
5.3. Prisión preventiva.....	38
5.4. Gestión de los juzgados de mayor riesgo .....	43
5.5. Infraestructura de los juzgados de mayor riesgo.....	44
5.6. Incumplimiento de los plazos procesales .....	45
<b>6. Procesos de mayor riesgo en Latinoamérica .....</b>	<b>48</b>
6.1. Benchmark de la legislación.....	49
6.2. Juzgados especializados.....	50
<b>7. Conclusiones.....</b>	<b>53</b>
<b>8. Recomendaciones.....</b>	<b>54</b>
<b>9. Anexos .....</b>	<b>57</b>
9.1. Comparativo de la legislación sobre procesos de mayor riesgo o procesos complejos.....	57
<b>10. Bibliografía .....</b>	<b>60</b>

## 1. Introducción

---

La evolución de la delincuencia a lo largo del tiempo lleva como consecuencia cambios en la impartición de justicia. En Guatemala se puede observar en las últimas dos décadas la incorporación de nuevas formas delictivas al derecho penal, la implementación de nuevos métodos de investigación y pruebas científicas para esclarecer los crímenes y procesar a los delincuentes, así como el fortalecimiento de los entes de investigación. En consecuencia, los juzgados y tribunales se ven obligados a conocer no solo nuevos delitos, sino también a trabajar con diferentes métodos de prueba, enfrentar nuevos perfiles de delincuentes y juzgar *modus operandi* hasta ahora desconocidos.

Ajustar las capacidades del Organismo Judicial para esta nueva tarea ha sido un gran reto que aún no ha concluido. Se han logrado varios avances a lo largo de los años, y la instalación de los órganos jurisdiccionales de mayor riesgo forma parte de ellos. Si bien la figura de “mayor riesgo” es única en Latinoamérica, se puede observar que otros países están incorporando el concepto de casos complejos en sus legislaciones, el cual hasta ahora no ha sido introducido aquí en Guatemala.

Más de la mitad de los casos que se ven en juzgados de mayor riesgo pueden ser atribuidos al crimen organizado, en menor proporción - pero mucho más mediáticos – delitos asociados a la corrupción y aún en menor proporción casos de graves violaciones a los derechos humanos, asociados más que todo a la justicia transicional. Si bien los casos de corrupción han llamado mucho la atención, los procesos penales de mayor riesgo van más allá. Son el reflejo del cambio de la forma de delinquir y de la formar de perseguir penalmente a los delincuentes. Se pueden observar estos mismos cambios en varios países latinoamericanos como un fenómeno reciente, con poca experiencia aún, pero que cada vez cobrará mayor relevancia a futuro.

Por lo mismo es de suma importancia que el Organismo Judicial pueda ajustar sus capacidades para hacerle frente a estos cambios, y poder llevar casos con múltiples sindicatos y nuevos métodos de investigación, siempre garantizando una justicia pronta.

El CIEN decidió realizar este análisis como un seguimiento al estudio “La prisión preventiva en Guatemala”, el cual fue realizado en 2018 y como un acercamiento al tema de justicia y justicia especializada. El estudio tiene como objetivo entender la creación del sistema de mayor riesgo y qué tanto cumple con su propósito. Para el efecto se analiza el marco legal, los antecedentes de creación y su actual funcionamiento, incluyendo algunos aspectos que constituyen desafíos. También se incluye una parte de análisis estadístico, para poder entender el tipo de casos que se llevan en estos juzgados. Para un mejor entendimiento se realizó una comparación de legislación con otros países, para comprender cómo se aborda esta temática en el resto de Latinoamérica. El documento termina con conclusiones y recomendaciones para poder llevar a cabo estos procesos de manera expedita.

## 2. Antecedentes

Las formas de delincuencia van cambiando. Surgió el crimen organizado cada vez más sofisticado y mejor establecido, hasta traspasar fronteras y volverse transnacional. A finales del siglo pasado, a nivel mundial, se empezaba a reconocer esta evolución ya no como un fenómeno aislado y nacional, sino regional y hasta mundial. También se vió la necesidad de cambiar la manera de afrontar la delincuencia organizada. Por lo mismo, el tema cobró relevancia en Naciones Unidas y culminó en la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, en el año 2000.<sup>1</sup>

### Recuadro 1. La Convención de Palermo.

#### *La Convención de Palermo*

*La delincuencia organizada transnacional representa para muchos países el mayor desafío en materia de seguridad. El impacto social, económico y cultural que tiene el crimen organizado transnacional ante las sociedades cada vez es mayor y más visible, ya que penetran las instituciones del Estado, afectan la gobernanza e impactan negativamente la seguridad y el desarrollo de los países. La corrupción les sirve como medio facilitador. La delincuencia organizada transnacional ha logrado evolucionar gracias a la globalización del comercio, el creciente flujo de personas y la facilitación de requisitos migratorios y fronterizos, la evolución de la tecnología y las comunicaciones, así como la facilidad de esconderse en el anonimato. La delincuencia organizada transnacional evoluciona constantemente y se diversifica, según el mercado lo permite: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, secuestros, extorsiones, ciberdelitos, terrorismo, entre otros.*

*A principios de los año 90 del siglo pasado, después de haber concluido la Guerra Fría, el tema de la delincuencia organizada transnacional se volvió actual, ya que los países empezaron a entender que esta forma de crimen ya no era un fenómeno local o regional, sino mundial, que también se debe combatir a nivel mundial de manera coordinada. Como lo dijo Kofi Annan en el Prefacio de la Convención de Palermo: “Si la delincuencia atraviesa fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley.” Se refería a que los esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada transnacional han sido muy frágiles por abordar el tema desde la perspectiva nacional, pero con la Convención se facilita un instrumento que permitirá abordarlo como problema mundial. Los antecedentes de la Convención de Palermo remontan a 1993, cuando en la ONU se inició a visualizar la problemática de la delincuencia organizada y la dificultad de hacerle frente especialmente en los países en desarrollo. En 1994 se llevó a cabo una*

<sup>1</sup> Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, transnacional y sus protocolos, suscrita por Guatemala en el 2000 y aprobada mediante el Decreto número 36-2003. A raíz de esta convención, se emitió la Ley contra la Delincuencia Organizada en el 2006.

*Conferencia Ministerial Mundial sobre la Delincuencia Organizada Transnacional en Italia, durante la cual se expresó el interés por parte de los países de Latinoamérica, África, Europa del Este y también de Italia, en una estandarización de los mecanismos de cooperación y la definición común de algunos conceptos y delitos en esta materia. Los países europeos occidentales, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se oponían a una convención internacional. Sin embargo, unos años más tarde, ante el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional (nuevas formas de terrorismo, tráfico de droga y migrantes), los países que originalmente no tenían interés en una convención, cambiaron su opinión. En 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación de un comité a cargo de la redacción de la convención. En 2000, después de dos años de negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención y en diciembre de 2000 se realizó una conferencia en Palermo (Italia) para que los diferentes países pudieran firmar el instrumento internacional.*

*Los puntos medulares de la Convención de Palermo son: a) Incluir en la legislación nacional los delitos de participación en la delincuencia organizada, corrupción, obstrucción a la justicia y blanqueo de productos de origen ilícito; b) colaborar a nivel internacional en la persecución de delitos de la criminalidad organizada transnacional; c) incorporar en la legislación internacional los métodos de investigación de escuchas telefónicas, entregas vigiladas y operaciones encubiertas; y d) establecer un régimen de investigación financiera para ubicar bienes de procedencia ilícita.*

Fuentes: Sandoval Mendiola, p. 51-55; Soriano (2014), p. 142-149; Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos (2004), Prefacio.

También en Guatemala se empezaba a hablar de la delincuencia organizada. Especialmente el narcotráfico se convirtió en la cara visible de la delincuencia organizada transnacional, pero también a nivel nacional destacaron bandas de secuestradores y sicarios, el surgimiento de los pandilleros, así como redes asociadas al ámbito político. Para Guatemala esta evolución de la delincuencia constituyó un reto muy grande, ya que entonces el Sistema Judicial se enfrentaba a deficiencias básicas como la falta de institucionalidad, frágil independencia judicial, falta de seguridad para protección del personal, ausencia de pruebas científicas que dejaba espacio para decisiones discrecionales y la influencia de poderes externos.<sup>2</sup> Durante la primera década del siglo XXI se pudo observar como la delincuencia organizada estaba penetrando las instituciones del Estado, incluyendo el Sistema Judicial, para garantizar su existencia, defender su impunidad y consolidar su poder.

Sin embargo, paralelamente, durante la misma década, surgieron varias iniciativas y avances importantes para contrarrestar a la delincuencia organizada:<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Fundación para el debido proceso legal (2007), p. 203 -263; Comisión Internacional de Juristas (2016), p. 115.

<sup>3</sup> Comisión Internacional de Juristas (2016), p. 119; Monterroso Castillo (2008), p. 114 – 118.

**Organismo Legislativo:** En el Congreso de la República se aprobaron varias leyes para mejorar la persecución penal de la delincuencia organizada, entre las cuales destacan:

- Reformas a la Ley contra la Narcoactividad (2003)
- Aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos (2005)
- Ley contra la Delincuencia Organizada (2006)
- Ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIF- (2006)
- Ley que aprueba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- (2007)
- Ley de Competencia Penal en Mayor Riesgo (2009)
- Ley de Extinción de Dominio (2010)

**Organismo Ejecutivo:** Varias instituciones se crearon para dar cumplimiento a las leyes aprobadas, como lo es el caso de la Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI-, el INACIF y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-. Se implementó el Sistema Nacional de Seguridad -SNS-. Posteriormente se inició con la creación de políticas públicas en los diversos ámbitos de seguridad, proceso que aún no ha concluido.

Además, en la estructura administrativa de la PNC se creó el Comando Antisecuestro<sup>4</sup>, la Subdirección General de Investigación Criminal -SGIC-<sup>5</sup> y se implementó el programa PANDA<sup>6</sup> en 2009 que posteriormente se convirtió en una unidad para el combate a las pandillas y se especializó en el tema de extorsiones. Al mismo tiempo, en el 2009, el MP creó la unidad contra las extorsiones en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y la misma se convirtió en Fiscalía de Sección contra las Extorsiones más adelante.<sup>7</sup> En la misma década se creó la Fiscalía de Delitos contra la Vida y se creó la Unidad de Métodos Especiales. Ambas instituciones recibieron también diversas capacitaciones en el tema de investigación criminal, escena de crimen y aplicación de nuevos métodos de investigación.

Sin embargo, a pesar de estos cambios a nivel legal y administrativo, no todo se logró implementar de la mejor manera por la falta de planificación y presupuesto.

**Organismo Judicial:** Cuando empezaron a llegar casos penales a los juzgados, cuyo manejo implicaba cierta complejidad y riesgos de seguridad para los partes procesales por el involucramiento del crimen organizado, el Organismo Judicial -OJ- consideró

---

<sup>4</sup> Acuerdo Gubernativo 202-2000.

<sup>5</sup> Acuerdo Gubernativo 66-2005.

<sup>6</sup> Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Inició como proyecto piloto y se convirtió en una unidad de la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- en 2011 y como en División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, parte de la SGIC, mediante Acuerdo Gubernativo 172-2014.

<sup>7</sup> Acuerdo 4-2014 del Consejo del Ministerio Público.

necesario ajustar su funcionamiento, creando en el año 2000 los Juzgados y Tribunales de Alto Impacto en los departamentos de Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango, cada uno con competencia para varios departamentos.<sup>8</sup> Dichos juzgados y tribunales funcionaron hasta el año 2006, cuando mediante Acuerdo 28-2006 de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- se disolvieron, argumentando que “... se ha observado que, ..., la concentración y juzgamiento de tales ilícitos penales no ha obtenido el resultado esperado y que lejos de favorecer la lucha contra el Crimen Organizado, se ha provocado atraso en la impartición de justicia; situación que hace conveniente modificar la competencia material de los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales de Sentencia Penal que funcionan en toda la República, para que además de los delitos que conocen, tramiten los procesos de alto impacto, ...”<sup>9</sup>. De tal manera los casos que se manejaron en estas instancias volvieron a pasar a los juzgados y tribunales ordinarios.

Además de las complicaciones procesales, los Juzgados y Tribunales de Alto Impacto habían estado expuestos a serios riesgos de seguridad, y no se logró evitar ataques violentos hacia los sujetos procesales.<sup>10</sup> El OJ no implementó medidas de seguridad suficientes y el personal quedaba demasiado expuesto.<sup>11</sup> Esta situación causaba mucha preocupación.

### Ilustración 1. Resumen de avances implementados de 2000-2010



Fuente: CIEN, elaboración propia.

<sup>8</sup> Acuerdos de la CSJ 8-2000, 41-2000, 46-2000, 1-2002 y 43-2004.

<sup>9</sup> CSJ, Acuerdo 28-2006, segundo considerando.

<sup>10</sup> Comisión Internacional de Juristas (2016), p. 116 y 117; Impunity Watch (2019), p. 1.

<sup>11</sup> Fundación Myrna Mack (2005), p. 6.

También en la siguiente década se implementaron varios cambios en la misma línea:

**Ilustración 2. Resumen de avances implementados de 2011-2019**



Fuente: CIEN, elaboración propia.

## 2.1. Creación de la competencia de mayor riesgo

La preocupación de garantizar la seguridad durante los procesos judiciales volvió a surgir cuando la CICIG había iniciado su trabajo. Por lo mismo, en 2008 la comisión presentó una propuesta de concentrar los casos de Alto Impacto en juzgados de la capital.<sup>12</sup> En consecuencia, la CSJ emitió en mayo del 2009 el Acuerdo 6-2009, mediante el cual declara competente a los Juzgados de Primera Instancia de turno del municipio de Guatemala para los casos de Mayor Riesgo del interior de la República. Según el acuerdo, dicha decisión está motivada por el hecho de que “... es necesario adoptar medidas de seguridad, que resguardan tanto a funcionarios y empleados judiciales como a los demás sujetos procesales vinculados a proceso por hechos delictivos complejos y graves que ocurran en el interior de la República en los que exista mayor riesgo personal..., tomando en cuenta que los juzgados de turno en la capital han sido implementados para minimizar tales riesgos.”<sup>13</sup>

Sin embargo, este acuerdo de la Corte fue sustituido unos meses más tarde por el Decreto 21-2009, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, aprobado de urgencia nacional por el Congreso de la República el 4 de agosto del 2009.

<sup>12</sup> Impunity Watch (2019), p. 1 y 2.

<sup>13</sup> Acuerdo de la CSJ 6-2009, segundo considerando.

Posteriormente, la CSJ emitió el Acuerdo 30-2009, mediante el cual designó al Juzgado Primero del municipio de Guatemala y al Tribunal Primero de sentencia del municipio de Guatemala como los órganos competentes para conocer los casos de mayor riesgo de toda la República. Dicho juzgado y tribunal conocen exclusivamente casos de mayor riesgo, según el artículo 2, párrafo 4.

Conforme ha ido aumentando la carga de trabajo y la cantidad de procesos de mayor riesgo, la CSJ ha ido creando más juzgados y tribunales con esta competencia. Actualmente existen seis Juzgados de Mayor Riesgo, seis Tribunales de Mayor Riesgo y dos Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo, de la siguiente forma:

**Tabla 1. Juzgados, Tribunales y Salas de Apelaciones de Mayor Riesgo**

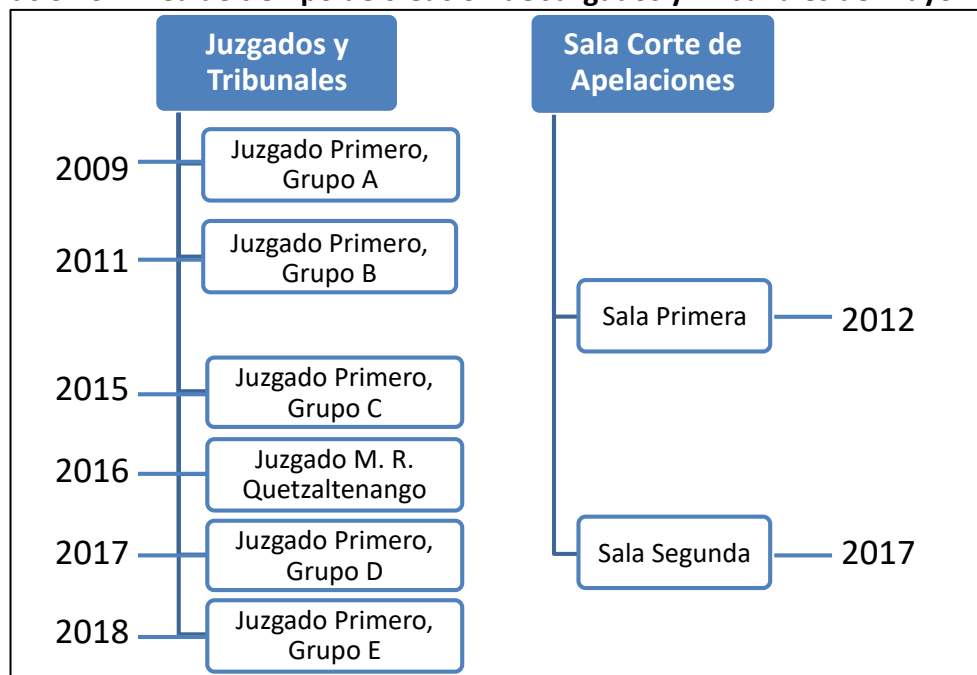
<b>Juzgado/Tribunal/Sala</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Fecha de creación</b>	<b>Acuerdo de creación</b>	<b>Integrantes</b>
Juzgado Grupo A	Guatemala	18.05.2009	30-2009	Claudette Dominguez
Juzgado Grupo B	Guatemala	27.04.2011	12-2011	Miguel Angel Galvez
Juzgado Grupo C	Guatemala	10.06.2015	10-2015	Silvia de León
Juzgado Quetzaltenango*	Quetzaltenango	18.08.2016	26-2016	Lester Castellanos
Juzgado Grupo D	Guatemala	22.06.2016 11.01.2017	15-2016 1-2017	Ericka Aifán
Juzgado Grupo E	Guatemala	20.12.2018	73-2018	Maribel Ramírez
Tribunal Grupo A	Guatemala	18.05.2009	30-2009	Yassmin Barrios
Tribunal Grupo B	Guatemala	27.04.2011	12-2011	María Castellanos
Tribunal Grupo C	Guatemala	10.06.2015	10-2015	Pablo Xitumul
Tribunal de Quetzaltenango*	Quetzaltenango	18.08.2016	26-2016	Jairo Calderón
Tribunal Grupo D	Guatemala	11.01.2017	1-2017	Sara Yoc
Tribunal Grupo E	Guatemala	20.12.2018	73-2018	Juan José Jiménez
Sala Corte de Apelaciones	Guatemala	1.08.2012	31-2012	
Sala Segunda Corte de Apelaciones	Guatemala	24.05.2017	31-2017	

Fuente: CIEN, elaboración propia a partir de los acuerdos de la CSJ.

\* El Juzgado y el Tribunal de mayor riesgo en Quetzaltenango tiene competencia en los departamentos de Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché y Sololá.

Al revisar las fechas de creación de cada uno de los juzgados y tribunales, se puede observar que desde el año 2015 se han creado un nuevo juzgado y un nuevo tribunal de mayor riesgo cada año.

**Ilustración 3. Línea de tiempo de creación de Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo**



Fuente: CIEN, elaboración propia a partir de los acuerdos de la CSJ.

## 2.2. Particularidades de la competencia de mayor riesgo en Guatemala

La primera particularidad es el tipo de delitos que son considerados de mayor riesgo. Al revisar el listado de los delitos contenidos en el artículo 3 de la ley, se pueden dividir en tres grandes grupos: 1. Delitos de crimen organizado, 2. Delitos de violaciones de derechos humanos, y 3. Delitos relacionados a la corrupción.

Los delitos per se no sorprenden, lo que es único en todo Latinoamérica, es el hecho de que un mismo juzgado o tribunal tiene competencia especializada sobre delitos de crimen organizado, corrupción y también violaciones de derechos humanos, ya que usualmente estos se litigan en órganos de justicia diferentes.<sup>14</sup>

La otra particularidad es la denominación de mayor riesgo. Al tomar en cuenta la historia de la creación de los órganos jurisdiccionales de mayor riesgo, se entiende porque en Guatemala se habla de casos de mayor riesgo y no de casos complejos, como en otros países. Los

<sup>14</sup> Ver capítulo 6 del Benchmark. Comisión Internacional de Juristas (2016), p. 127.

antecedentes violentos en los Juzgados y Tribunales de Alto Impacto convirtieron la garantía de la seguridad de todos los sujetos procesales como algo prioritario, lo mismo también se deja claro en el Decreto 21-2009, al establecer el riesgo de seguridad como uno de los requisitos primordiales. Para poder garantizar la seguridad en estos casos, los juzgados y tribunales están ubicadas en los últimos dos pisos de la Torre de Tribunales para un mejor control de acceso a los mismos, cuentan con personal de seguridad adicional, además con detectores de metal en las entradas de las salas de audiencias y también con carceletas para ubicar a los sindicados durante las audiencias. Los jueces cuentan con personal de custodia para su seguridad personal.<sup>15</sup>

Sin embargo, se observa que no existe una clara diferenciación entre los conceptos de “mayor riesgo”, “caso complejo” y “crimen organizado” A continuación se explica cada concepto:

**Mayor riesgo:** Se refiere a los riesgos de seguridad que conlleva un proceso penal para los sujetos procesales. Se define en los artículos 1 y 2 de la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, refiriéndose a la seguridad de las personas.

**Caso complejo:** Es un concepto reconocido en la literatura y en algunas legislaciones, el cual se refiere a la complejidad de un caso en términos materiales y procesales y usualmente consiste en tres elementos:

- 1) **Pluralidad de sujetos procesales:** Un caso puede considerarse complejo, porque involucra a varias personas. A partir de tres personas por ejemplo puede ser considerado delincuencia organizada.<sup>16</sup> El hecho de tener que investigar, determinar y probar las acciones delictivas de más de una persona, conlleva mayor tiempo y puede ser más complicado, en particular si la cantidad de personas supera los diez.

El caso se complica aún más, si no se conoce a los autores de los delitos. Esto surge en los casos de los cuales hay conocimiento del delito, pero no de los hechos.<sup>17</sup> La individualización de las personas que cometieron un hecho delictivo puede ser un gran reto, así como también determinar el rol que desempeñó cada uno en una banda criminal e individualizar los delitos<sup>18</sup>.

- 2) **Pluralidad de delitos:** Un caso puede considerarse complejo, porque consiste en la comisión de diversos hechos delictivos, los cuales deben ser investigados y

---

<sup>15</sup> Fiscales entrevistados señalaron que las medidas de seguridad aún son insuficientes. Al inicio cuando únicamente hubo dos juzgados de mayor riesgo el tema de seguridad estuvo mejor, sin embargo con la habilitación de juzgados adicionales, este tema quedó debilitado y actualmente los jueces consideran que las medidas son insuficientes.

<sup>16</sup> En caso de cumplir con el resto de requisitos establecidos por la Ley contra la Delincuencia Organizada.

<sup>17</sup> Centro de Estudios de Justicia en las Américas (2013), p. 29.

<sup>18</sup> Entrevista Fiscalía contra las Extorsiones, 2019.

comprobados cada uno. Existen delitos que requieren un esfuerzo mayor para poder ser comprobados, por la naturaleza de los mismos, como lo es el caso de los delitos financieros o de corrupción.

- 3) **Dificultad probatoria:** Existen casos, cuyas pruebas conllevan un proceso largo o complicado para obtenerlas. Eso puede ser el caso de las escuchas telefónicas que se llevan a cabo por varios días, semanas o meses, hasta tener las pruebas suficientes. El rastreo del flujo de dinero en delitos financieros o de corrupción puede ser muy intenso para unir toda la documentación necesaria.<sup>19</sup> Ambos métodos pueden generar pruebas voluminosas (audios y/o documentación).

Otra complicación se puede dar en delitos que ocurrieron hace mucho tiempo y cuyos hechos deben ser reconstruidos a través de testimonios que pueden ser revictimizantes, tardados y extensos.<sup>20</sup> Lo mismo puede ocurrir en casos con la figura del colaborador eficaz.<sup>21</sup>

A raíz de lo antes explicado, en los casos complejos la **documentación es voluminosa** por la cantidad de sindicados y delitos a tratar. Pero también por los métodos de investigación que se aplican, como por ejemplo las escuchas telefónicas que suelen ser largas, generan documentación abundante y consumen mucho tiempo durante las audiencias.

En resumen, un caso complejo puede tener distintas facetas, pero usualmente están involucrados varios sindicados que actuaron de forma coordinada y efectuaron diversos delitos, cuya investigación requiere un esfuerzo mayor por la tardanza o complicación de conseguir los medios de prueba suficientes.

**Delincuencia organizada:** Se refiere a delitos cometidos por un grupo delictivo organizado, que consiste de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer delitos. Los delitos de la delincuencia organizada son regulados en la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual permite métodos especiales de investigación.

La diferenciación de los conceptos de “mayor riesgo”, “caso complejo” y “crimen organizado” se detalla en la Ilustración 4.

---

<sup>19</sup> CICIG (2019), p. 27.

<sup>20</sup> Herrera Ramírez (2018), p. 7.

<sup>21</sup> Por ejemplo, en el caso “Cooptación del Estado”, el colaborador Juan Carlos Monzón declaró en anticipo de prueba por 14 días.

#### Ilustración 4. Conceptos



Fuente: CIEN, elaboración propia.

Si bien un delito de la delincuencia organizada puede también cumplir con los elementos de un caso complejo y de un caso de mayor riesgo, esto no siempre se da. Por lo mismo es importante hacer las distinciones respectivas y tener claro que el término “mayor riesgo” se refiere específicamente a los riesgos de seguridad de los sujetos procesales. La Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo enumera los delitos que califican para ser considerado un proceso de mayor riesgo, pero adicionalmente debe existir un riesgo para la seguridad de los partes procesales. Si solo se cumple uno de los dos requisitos no es suficiente para pedir/otorgar la competencia de mayor riesgo.

A raíz de eso, se puede concluir que los procesos de mayor riesgo se diferencian de los procesos ordinarios, por tener mayores riesgos de seguridad para los sujetos procesales y por tener mayores medidas de seguridad en las instalaciones judiciales. Usualmente también se trata de casos complejos, por la cantidad de sindicados y el tipo de delitos a juzgar. Pero lo último es una coincidencia, no una condición necesaria. Más adelante, en el capítulo 4 se detallan datos sobre los juzgados de mayor riesgo y se muestra que la mitad de los 222 expedientes analizados tenía uno o dos sindicados (Ver Tabla 6).

### 3. Marco legal

---

A continuación se detalla el marco legal para los procesos de mayor riesgo en Guatemala.

#### 3.1. Código Procesal Penal

Según el artículo 5 del Código Procesal Penal –CPP– “el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido; el establecimiento de la posible participación del sindicado; el pronunciamiento de la sentencia respectiva, y la ejecución de la misma.” El CPP establece las diferentes etapas del proceso penal y las normas respectivas. En el mismo instrumento legal se indica que, “los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni la de sus diligencias o incidencias”<sup>22</sup>, lo cual significa que el proceso penal es igual para todos los sindicados y no puede ser variado bajo ninguna circunstancia.

El proceso penal guatemalteco consta de diferentes fases:<sup>23</sup>

##### 1. Procedimiento preparatorio:

- a. El fin de esta fase es averiguar si existe un hecho criminal, las circunstancias respectivas y la vinculación del imputado con el mismo.
- b. Inicia con una denuncia, querrela o conocimiento de oficio.
- c. Audiencia de primera declaración y auto de procesamiento y auto de prisión preventiva o de medida sustitutiva del imputado. El auto de procesamiento es importante en el sentido que detalla los delitos de los cuales el imputado podrá ser acusado formalmente y los mismos son determinantes para decretar medidas sustitutivas o prisión preventiva. Solo puede ser modificado antes de realizarse la acusación.
- d. Termina con el acto conclusivo que es la petición del MP para la acusación, el sobreseimiento o la clausura provisional.
- e. Debe terminar en un plazo máximo de 3 meses en caso de prisión preventiva y un máximo de 6 meses en caso de medida sustitutiva.

##### 2. Procedimiento intermedio:

- a. El fin de esta fase es que el juez evalúe si hay suficientes fundamentos para someter al acusado a un juicio y si el juicio está preparado convenientemente.
- b. Inicia con la petición de acusación, sobreseimiento o clausura provisional del MP de la fase anterior.
- c. Audiencia a las partes y auto de apertura a juicio, el sobreseimiento o clausura.

---

<sup>22</sup> Código Procesal Penal, artículo 3.

<sup>23</sup> CIEN (2018), p. 28 y 29.

- d. Audiencia de ofrecimiento de pruebas y auto de admisión o rechazo de pruebas, y citación a juicio.
- e. El plazo entre el auto de admisión de prueba y el inicio del juicio debe ser entre 10 a 15 días.

### 3. Juicio:

- a. El fin de esta fase es llevar a cabo el debate oral y público y llegar a una sentencia por parte del tribunal.
- b. Inicia con el juicio.
- c. Finaliza con la sentencia del tribunal al concluir el debate oral y público.

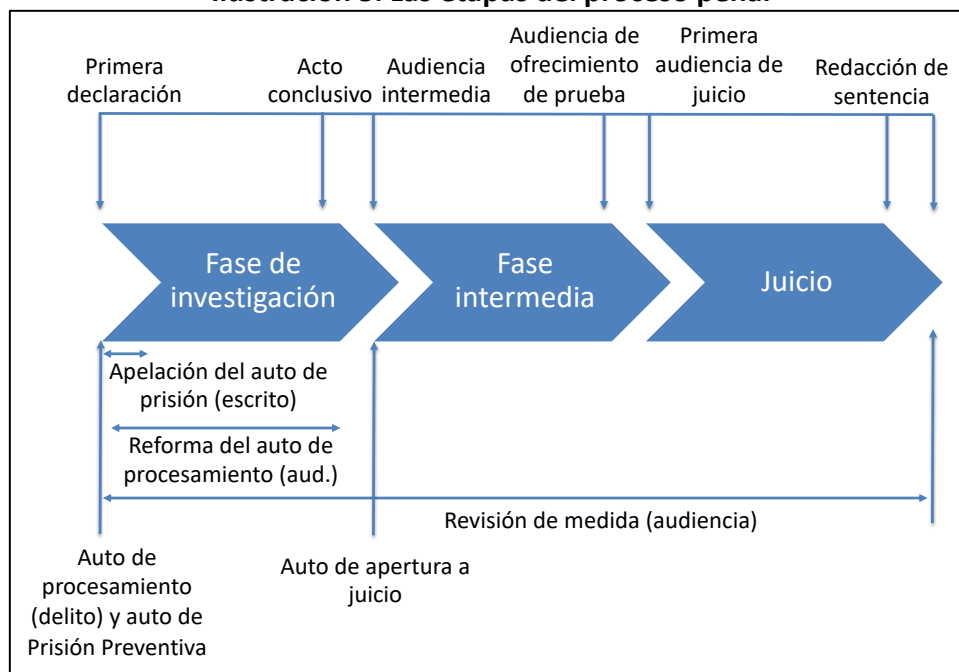
### 4. Impugnaciones

- a. Si una parte procesal no está de acuerdo con la sentencia, puede interponer una apelación.

### 5. Ejecución de la sentencia

- a. Una vez firme la sentencia, se inicia la fase de ejecución de la misma, a cargo de un Juzgado de Ejecución.

**Ilustración 5. Las etapas del proceso penal**



Fuente: CIEN, elaboración propia.

### 3.2. Competencia de mayor riesgo

La competencia de los juzgados, tribunales y salas de la corte de apelaciones están definidos en el CPP de la siguiente manera:

**Ilustración 6. Competencias judiciales**

	Competencia Ordinaria		Competencia Especializada
Etapa inicial e intermedia	Penas < 5 años	Penas > 5 años	Juzgados de: - <b>Mayor Riesgo</b> , - Extinción de Dominio, - Femicidio
	- Juzgado de Paz - Juzgado de Paz Móvil	- Juzgado de Primera Instancia Penal NYDCA	
Juicio	Juzgado de Paz de Sentencia Penal	- Tribunal de Primera Instancia Penal NYDCA	Tribunales de: - <b>Mayor Riesgo</b> , - Extinción de Dominio, - Femicidio

Fuente: CIEN, elaboración propia.

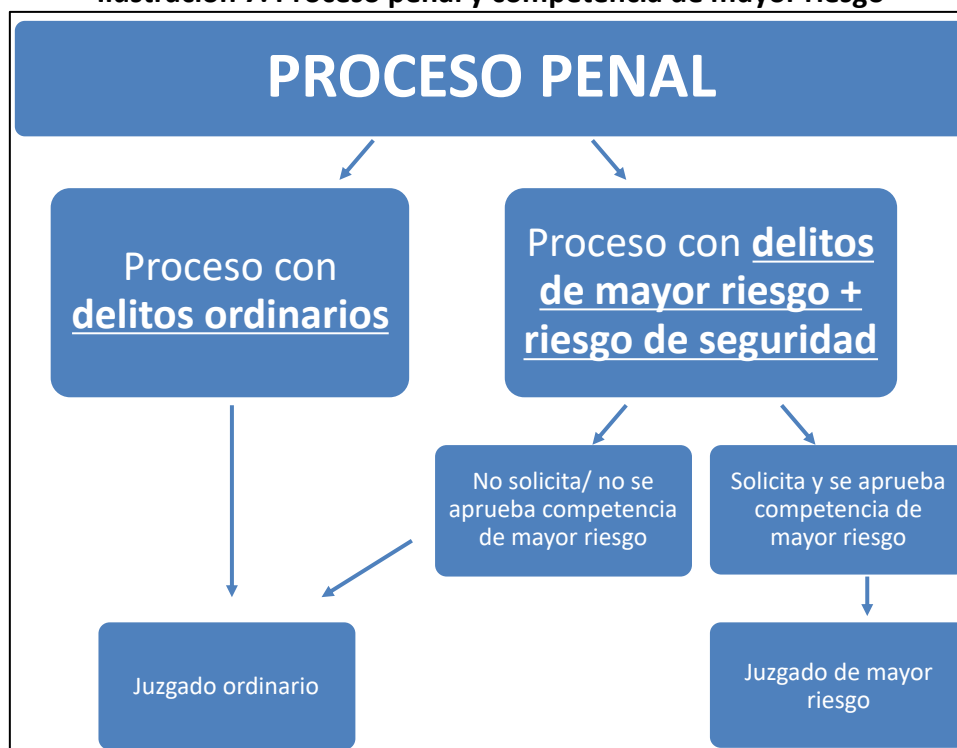
Tanto los juzgados/tribunales de paz como los juzgados/tribunales de primera instancia son considerados de competencia ordinaria. Los juzgados/tribunales de mayor riesgo, extinción de dominio, femicidio y de delitos económicos son considerados de competencia especial, porque se requiere cumplir requisitos particulares para establecer dichas competencias.

En el caso de la competencia de mayor riesgo, aplica la Ley de Competencia penal en procesos de mayor riesgo, Decreto 21-2009. En el artículo 2 de esta norma se establecen como requisitos un delito de mayor riesgo según el artículo 3 de la misma ley y adicionalmente la existencia de riesgos para la seguridad personal de jueces, magistrados, fiscales y auxiliares de justicia, así como imputados, testigos y otros sujetos procesales. Los delitos considerados de mayor riesgo son: Genocidio, delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, desaparición forzada, tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio y femicidio, delitos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y los delitos con pena máxima superior a quince años de prisión contenido en la Ley contra la Narcoactividad o la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.<sup>24</sup> Lo importante es que se necesitan ambos requisitos, de lo contrario el caso se trabaja en un juzgado/tribunal ordinario.

<sup>24</sup> Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, artículo 3.

Para lograr la competencia de mayor riesgo, el Fiscal General del MP debe realizar una solicitud que será resuelta por la Cámara Penal de la CSJ. Dicha solicitud puede realizarse desde el inicio de la investigación hasta antes de iniciar el debate oral.<sup>25</sup>

**Ilustración 7. Proceso penal y competencia de mayor riesgo**



Fuente: CIEN, elaboración propia.

### 3.3. Aplicación del derecho procesal ordinario

Aún cuando se haya establecido la competencia de un juzgado de mayor riesgo para un caso, su proceso penal se lleva a cabo mediante las normas procesales ordinarias, ya que la competencia de mayor riesgo no establece normas procesales distintas. Lo único que varía es que son los juzgados especiales y no ordinarios que están a cargo del proceso.

### 3.4. Ley contra la delincuencia organizada

En el 2006 se aprobó la Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto número 21-2006, para dar cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional – Convención de Palermo.

<sup>25</sup> *Ibíd.*, artículo 4.

Dicha ley, además de definir la delincuencia organizada, establece unos delitos específicos. Además regula nuevos métodos de investigación como las operaciones encubiertas, la entrega vigilada y las escuchas telefónicas.<sup>26</sup> Dichos métodos se pueden aplicar únicamente en el caso de delincuencia organizada, por la naturaleza compleja de sus operaciones y la dificultad probatoria de sus actos ilícitos. La ley establece explícitamente que los plazos para la investigación se rigen de acuerdo al CPP.<sup>27</sup> Además, la ley contempla la figura del colaborador eficaz y regula los requisitos y beneficios del mismo.<sup>28</sup>

A pesar de que esta ley norma delitos específicos y métodos de investigación adicionales, el proceso penal se lleva a cabo de acuerdo al establecido en el CPP. No existen normas procesales especiales para casos de delincuencia organizada. Si el caso reúne los requisitos de mayor riesgo, se puede solicitar la competencia de mayor riesgo según la ley respectiva.

## 4. Los procesos de mayor riesgo en números

---

Para tener un panorama de los casos que han conocido por los juzgados de mayor riesgo se solicitó información al Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial -CIDEJ- del OJ, en específico de estos juzgados. Se proporcionó información para el periodo de enero de 2011 al 15 de octubre de 2019.<sup>29</sup>

A continuación se detallan los principales datos que se pudieron extraer del sistema informático.

### 4.1. Cantidad de casos

La información proporcionada por el CIDEJ, muestra que, los Juzgados de Mayor Riesgo, que incluye los grupos del A al E del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal (Guatemala) y el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, han conocido un total de 1,073 casos. Sin embargo, la distribución de los casos varía notablemente a través del tiempo y entre los grupos.

---

<sup>26</sup> Ley contra la Delincuencia Organizada, artículos del 21 al 72.

<sup>27</sup> *Ibíd.*, artículo 12.

<sup>28</sup> *Ibíd.*, artículos del 90 al 102.

<sup>29</sup> El CIDEJ proporciona información desde el año 2011 pues fue cuando se volvió obligatorio el uso del Sistema de Gestión de Tribunales según Acuerdo 20-2011. Anteriormente el sistema estaba en prueba y su uso no era obligatorio, por lo que previo al año 2011 la información del OJ se encuentra únicamente en papel. En la actualidad, a pesar de que el uso del sistema es obligatorio, aún existen desafíos para que el personal de los juzgados suba la totalidad de la información al sistema. El artículo 4 del Acuerdo establece que el incumplimiento de esta disposición constituye una falta de conformidad con la Ley de Servicio Civil del OJ.

Los años 2013 a 2015 concentran una alta proporción de los casos (46% del total). En el año 2014 hay una alta concentración de los casos en el “Grupo B”,<sup>30</sup> pues se le asignaron 163 casos, lo cual representa el 48% de los 338 casos asignados a ese grupo en todo el periodo.

**Tabla 2. Casos ingresados a los Juzgados de Mayor Riesgo (por grupos), 2011 a 2019**

Año/Grupo	Juzgado*	A	B	C	D	E	Qtzgo.	Total	%
2011	51	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	51	5%
2012	n/a	53	36	n/a	n/a	n/a	n/a	89	8%
2013	n/a	45	65	n/a	n/a	n/a	n/a	110	10%
2014	n/a	81	163	n/a	n/a	n/a	n/a	244	23%
2015	n/a	67	59	13	n/a	n/a	n/a	139	13%
2016	n/a	71	3	22	n/a	n/a	n/a	96	9%
2017	n/a	19	1	8	14	n/a	12	54	5%
2018	n/a	5	3	8**	12	n/a	3	23	2%
2019	n/a	30	8	7	6	6	210***	267	25%
Total	51	371	338	50	32	6	225	1,073	
%	5%	35%	32%	5%	3%	1%	21%		
Promedio	51	46	42	13	11	6	9****		

Fuente: CIDEJ, 2019.

\* En el año 2011 aún no existían los grupos. En 2012 se crea el Grupo B y a partir de entonces se tiene información desglosada por grupo.

\*\*No ingresaron procesos nuevos únicamente conexiones, según información proporcionada por Secretaría del Juzgado.

\*\*\* Cuando el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango fue habilitado se le asignó la competencia de Mayor Riesgo en los seis departamentos de la región Sur-Occidente y en Huehuetenango y Quiché. Sin embargo, el Acuerdo 2-2019 de la Corte Suprema de Justicia modificó la competencia de este juzgado el 16 de enero de 2019, ampliándola a los tres delitos relacionados con la extorsión en la misma área geográfica. La competencia de este juzgado fue nuevamente modificada el 3 de agosto de 2019 mediante el Acuerdo 39-2019 para reducir la competencia geográfica únicamente al departamento de Quetzaltenango en los casos de los tres delitos de extorsión y dejándola en el área geográfica como estaba inicialmente para los casos de mayor riesgo. En el año 2019 ingresaron 12 casos de mayor riesgo en este juzgado, pero además ingresaron 198 casos en proceso ordinario para los tres delitos relacionados a extorsión.

\*\*\*\* Para el promedio en Quetzaltenango solo se tomaron los 12 casos de mayor riesgo en 2019.

<sup>30</sup> Se está haciendo el análisis únicamente de los casos asignados. Para tener un panorama más completo habría que indagar sobre el tipo y la cantidad de delitos, la cantidad de procesados por caso y las resoluciones emitidas en cada uno de los juzgados, entre otra información. Más adelante se muestran algunos de estos datos.

Hasta el año 2014 solo existieron el “Grupo A”, y el “Grupo B”, por lo que estos dos concentran el 66% del total de casos asignados. En promedio, estos grupos han tenido asignados más de 40 casos cada año, mientras que los juzgados de más reciente creación tienen asignaciones promedio cercanas a 10 casos por año (Ver Tabla 2).

En el año 2018, en los juzgados del ramo penal del OJ ingresaron 94,363 casos<sup>31</sup>, con lo cual, lo ingresado en los Juzgados de Mayor Riesgo en ese año, corresponde al 0.024% del total de casos del ramo penal ingresados al OJ en 2018<sup>32</sup>.

#### 4.2. Expedientes en los que se tomó alguna decisión

La información proporcionada por el CIDEJ para 333 expedientes en los que se tomó alguna decisión en un juzgado de mayor riesgo, muestra que el 32% de estos ingresaron al sistema de justicia en 2019<sup>33</sup>. La mayoría de los expedientes (61%) en el periodo analizado ingresaron en el Juzgado A (36%) y el de Mayor Riesgo de Quetzaltenango (25%).

**Tabla 3. Expedientes ingresados al los Juzgados de Mayor Riesgo (por grupos)**

Año/Juzgado	A	B	C	D	E	Qtzgo.	Total	%
2010	6						6	2%
2011	13	4					17	5%
2012	25	8					33	10%
2013	14	6					20	6%
2014	16	8					24	7%
2015	10	13	4				27	8%
2016	8	1	17				26	8%
2017	11	6	4	8		5	34	10%
2018	7	2	9	6		16	40	12%
2019	11	20	5	7	2	61	106	32%
<b>Total</b>	<b>121</b>	<b>68</b>	<b>39</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>333</b>	
<b>%</b>	<b>36%</b>	20%	12%	6%	1%	<b>25%</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

<sup>31</sup> Anuario Estadístico del Organismo Judicial, páginas 17 y 22, año 2018.

<sup>32</sup> Si se comparan los datos de 2017, el porcentaje es 0.055% (54 de 97,873).

<sup>33</sup> Corresponde a 106 expedientes, 61 de los cuales (58%) ingresaron al Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango. El incremento en la cantidad de expedientes en este juzgado deriva de la ampliación de su competencia como se detalló anteriormente.

#### 4.2.1. Tipo de decisiones tomadas en los expedientes

En los 333 expedientes mencionados anteriormente, se tomaron 4,978 decisiones. De estas, el 40% se tomaron en el Juzgado C<sup>34</sup>. En total, las decisiones tomadas fueron principalmente autos de procesamiento, prisión preventiva, autos de apertura a juicio y medidas sustitutivas (85% del total de decisiones tomadas).

**Tabla 4. Resultados de decisión en los Juzgados de Mayor Riesgo (por grupos)**

Decisión/Juzgado	A	B	C	D	E	Qtzgo.	Total general	%
Auto de Procesamiento	219	231	677	86	80	188	<b>1,481</b>	29.8%
Prisión Preventiva	346	234	587	79	60	115	<b>1,421</b>	28.5%
Auto de Apertura a Juicio	149	67	502	35	1	113	<b>867</b>	17.4%
Medida Sustitutiva	138	71	88	19	29	112	<b>457</b>	9.2%
Pendiente de Resolver su situación jurídica	5	10	9	7		205	<b>236</b>	4.7%
Falta de Mérito	9	16	32	11	2	56	<b>126</b>	2.5%
Orden de Aprehesión	9	26	14	23		54	<b>126</b>	2.5%
Sobreseimiento	9	10	29	4		32	<b>84</b>	1.7%
Clausura Provisional		6	27	1	1	3	<b>38</b>	0.8%
Archivo						25	<b>25</b>	0.5%
Suspensión Condicional de la Pena	3	3	10	1			<b>17</b>	0.3%
Con lugar	2		14				<b>16</b>	0.3%
Sentencia Condenatoria	7	3		2		1	<b>13</b>	0.3%
Reforma de Auto de Procesamiento			8		1	3	<b>12</b>	0.2%
Revisión de la Medida de Coerción			2	2		6	<b>10</b>	0.2%
Otros						9	<b>9</b>	0.2%
Extinción de la Persecución Penal		2	2			4	<b>8</b>	0.2%
Criterio de Oportunidad	3	1	1	1			<b>6</b>	0.1%
Certificación de lo conducente			1			4	<b>5</b>	0.1%
Sentencia Absolutoria	2	2				1	<b>5</b>	0.1%
Sentencia en Procedimiento Abreviado	3	1					<b>4</b>	0.1%

<sup>34</sup> Esto se explica principalmente porque este juzgado tiene el mayor número de sindicados. Ver Tabla 5.

Decisión/Juzgado	A	B	C	D	E	Qtzgo.	Total general	%
Suspensión condicional de la persecución penal	1		1	1			3	0.1%
Suspensión de la Persecución Penal	3						3	0.1%
Inimputabilidad			1				1	0.0%
Internación Provisional		1					1	0.0%
No ha lugar a orden de aprehensión						1	1	0.0%
Rechaza	1						1	0.0%
Recurso de Reposición						1	1	0.0%
Sin lugar	1						1	0.0%
<b>Total</b>	<b>910</b>	<b>684</b>	<b>2,005</b>	<b>272</b>	<b>174</b>	<b>933</b>	<b>4,978</b>	
<b>%</b>	<b>18%</b>	<b>14%</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>19%</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.3. Cantidad de sindicados por juzgado y prisión preventiva

De 222 expedientes en los que hay información sobre algún resultado de decisión que involucra prisión preventiva o medida sustitutiva, se tienen 1,878 sindicados. De estos, a 457 personas se otorgaron medidas sustitutivas y a 1,421 (76%) se les dictó prisión preventiva. La proporción de personas a las que se les otorga medida sustitutiva va del 13% en el Juzgado C al 49% en el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.

El juzgado que más sindicados ha tenido es el C, con 675 personas, el 36% del total.

**Tabla 5. Medidas sustitutivas y prisiones preventivas por sindicados en los Juzgados de Mayor Riesgo (por grupos)**

Juzgado/ Medida	Medida Sustitutiva	Prisión Preventiva	Total	%
<b>CANTIDADES</b>				
<b>A</b>	138	346	<b>484</b>	25.8%
<b>B</b>	71	234	<b>305</b>	16.2%
<b>C</b>	88	587	<b>675</b>	<b>35.9%</b>
<b>D</b>	19	79	<b>98</b>	5.2%
<b>E</b>	29	60	<b>89</b>	4.7%
<b>Qtzgo.</b>	112	115	<b>227</b>	12.1%
<b>Total</b>	<b>457</b>	<b>1,421</b>	<b>1,878</b>	

Juzgado/ Medida	Medida Sustitutiva	Prisión Preventiva	Total	%
<b>PORCENTAJES</b>				
<b>A</b>	28.5%	71.5%		
<b>B</b>	23.3%	76.7%		
<b>C</b>	<b>13.0%</b>	87.0%		
<b>D</b>	19.4%	80.6%		
<b>E</b>	32.6%	67.4%		
<b>Qtzgo.</b>	<b>49.3%</b>	50.7%		
<b>Total</b>	<b>24.3%</b>	<b>75.7%</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.3.1. Sindicados por expediente

La cantidad de sindicados por expediente va desde uno hasta doscientos. Sin embargo, la mitad de los expedientes (111) tienen uno o dos sindicados<sup>35</sup> y en el 75% de los expedientes (167) se tienen ocho o menos sindicados. Los restantes 55 casos que representan el otro 25%, la mayoría están en los juzgados C, A y B, en orden de cantidades. Ver Tabla 6.

En el Juzgado C, de las 675 personas que se muestran en la Tabla 5, 369 (55%) pertenecen a tres casos: un caso con 73 personas, otro con 96 y uno con 200. Ver Tabla 6. Por otra parte, en la Tabla 5 se muestra que la cantidad de sindicados es similar en los juzgados D y E, sin embargo, el Juzgado E solo tiene 2 casos (uno con 81 personas) y el Juzgado D tiene 13 casos.

**Tabla 6. Cantidad de sindicados en los Juzgados de Mayor Riesgo (por grupos)**

Sindicados/ Juzgado	A	B	C	D	E	Qtzgo.	Total	%	% Acum.
1	33	14	4	5		22	78	35.1%	35.1%
2	9	10	4	1		9	33	14.9%	50.0%
3	7	4				1	12	5.4%	55.4%
4	11	3	2	1			17	7.7%	63.1%
5	5	2	3	1			11	5.0%	68.0%
6	1		2			2	5	2.3%	70.3%
7	1	3				1	5	2.3%	72.5%
8	3	1		1	1		6	2.7%	75.2%
9	1	2				1	4	1.8%	77.0%

<sup>35</sup> Esto significa que el 50% de los expedientes de los juzgados de mayor riesgo tienen tres o más sindicados. En el caso de los juzgados ordinarios, solo el 7% de los expedientes tienen tres o más sindicados. Ver Gráfica 4 en el apartado de prisión preventiva del capítulo 5.

Sindicados/ Juzgado	A	B	C	D	E	Qtzgo.	Total	%	% Acum.
10	1	2	1			1	5	2.3%	79.3%
11	3		1				4	1.8%	81.1%
12	1	1		1			3	1.4%	82.4%
13		1	3	1			5	2.3%	84.7%
14	1						1	0.5%	85.1%
15	1		1				2	0.9%	86.0%
16	1						1	0.5%	86.5%
17		1	2				3	1.4%	87.8%
18	1	1	1			1	4	1.8%	89.6%
19	1	1	1				3	1.4%	91.0%
20			1			2	3	1.4%	92.3%
21				1			1	0.5%	92.8%
24			1				1	0.5%	93.2%
25	1		1				2	0.9%	94.1%
28		1		1			2	0.9%	95.0%
35	1						1	0.5%	95.5%
41	1						1	0.5%	95.9%
42						1	1	0.5%	96.4%
44			1				1	0.5%	96.8%
46						1	1	0.5%	97.3%
59	1						1	0.5%	97.7%
63		1					1	0.5%	98.2%
73			1				1	0.5%	98.6%
81					1		1	0.5%	99.1%
96			1				1	0.5%	99.5%
200			1				1	0.5%	100.0%
<b>Total</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>222</b>		
<b>%</b>	38%	22%	14%	6%	1%	19%			
<b>Más de 8</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>55</b>		
<b>%</b>	27%	20%	31%	7%	2%	13%			

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4. Tipo de delitos

De los datos proporcionados por el CIDEJ, los delitos registrados por los sindicados en los Juzgados de Mayor Riesgo suman 7,531. El 75% del total se concentra en 20 delitos y los nueve principales suman el 60.4% de los delitos registrados, siendo los primeros cinco: asociación ilícita (28.3%), asesinato (6.5%), obstrucción extorsiva de tránsito (5.8%), extorsión (4.4%) y lavado de dinero (4.2%).

**Tabla 7. Cantidad de delitos en los expedientes de los Juzgados de Mayor Riesgo**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Asociación ilícita	2,131	28.3%	28.3%
2	Asesinato	490	6.5%	34.8%
3	Obst. Extorsiva de Tránsito	435	5.8%	40.6%
4	Extorsión	334	4.4%	45.0%
5	Lavado de Dinero	320	4.2%	49.3%
6	Secuestro	275	3.7%	52.9%
7	Robo Agravado	203	2.7%	55.6%
8	Conspiración para cometer asesinato	188	2.5%	58.1%
9	Asesinato en Grado de Tentativa	169	2.2%	60.4%
10	Abuso de Autoridad	148	2.0%	62.3%
11	Comercio, Tráfico y almacenamiento ilícito	124	1.6%	64.0%
12	Encubrimiento Propio	123	1.6%	65.6%
13	Fraude	123	1.6%	67.2%
14	Cohecho Activo	116	1.5%	68.8%
15	Conspiración	113	1.5%	70.3%
16	Peculado	94	1.2%	71.5%
17	Allanamiento	83	1.1%	72.6%
18	Incendio	74	1.0%	73.6%
19	Estafa Propia	68	0.9%	74.5%
20	Incumplimiento de Deberes	68	0.9%	75.4%
	Otros	1,852	24.6%	100.0%
	<b>Suma</b>	<b>7,531</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4.1. Tipo de delitos, Juzgado Grupo A

De los 7,531 delitos que se tienen registrados en la base de datos, 2,714 (36%) son del Juzgado Grupo A. En este juzgado, el 78% del total se concentra en 20 delitos y los 8 principales suman el 60% de los delitos registrados, siendo los primeros cinco: asociación ilícita (29.1%), asesinato (7.4%), obstrucción extorsiva de tránsito (6.1%), secuestro (4.8%) y extorsión (3.7%).

**Tabla 8. Cantidad de delitos en los expedientes del Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo A**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Asociación ilícita	791	29.1%	29.1%
2	Asesinato	201	7.4%	36.6%
3	Obst. Extorsiva de Tránsito	165	6.1%	42.6%
4	Secuestro	131	4.8%	47.5%
5	Extorsión	101	3.7%	51.2%
6	Lavado de Dinero	86	3.2%	54.3%
7	Asesinato en Grado de Tentativa	78	2.9%	57.2%
8	Robo Agravado	72	2.7%	59.9%
9	Conspiración	65	2.4%	62.3%
10	Comercio, Tráfico y almacenamiento ilícito	56	2.1%	64.3%
11	Encubrimiento Propio	47	1.7%	66.1%
12	Conspiración para cometer asesinato	44	1.6%	67.7%
13	Peculado	40	1.5%	69.2%
14	Incumplimiento de Deberes	39	1.4%	70.6%
15	Portación Ilegal de Armas	38	1.4%	72.0%
16	Abuso de Autoridad	36	1.3%	73.3%
17	Tenencia ilegal de armas de fuego	34	1.3%	74.6%
18	Tenencia ilegal de municiones	32	1.2%	75.8%
19	Violación	30	1.1%	76.9%
20	Casos Especiales de Estafa	29	1.1%	77.9%
	Otros	599	22.1%	100.0%
	<b>Suma</b>	<b>2,714</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4.2. Tipo de delitos, Juzgado Grupo B

De los 7,531 delitos que se tienen registrados en la base de datos, 1,706 (22.7%) son del Juzgado Grupo B. En este juzgado, el 75.4% del total se concentra en 20 delitos y los 10 principales suman el 59% de los delitos registrados, siendo los primeros cinco: asociación ilícita (25.4%), asesinato (6.6%), secuestro (5.2%), lavado de dinero (3.9%) y cohecho activo (3.8%).

**Tabla 9. Cantidad de delitos en los expedientes del Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo B**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Asociación ilícita	434	25.4%	25.4%
2	Asesinato	112	6.6%	32.0%
3	Secuestro	89	5.2%	37.2%
4	Lavado de Dinero	66	3.9%	41.1%
5	Cohecho Activo	64	3.8%	44.8%
6	Robo Agravado	55	3.2%	48.1%
7	Defraudación Aduanera	53	3.1%	51.2%
8	Extorsión	53	3.1%	54.3%
9	Incendio	41	2.4%	56.7%
10	Asesinato en Grado de Tentativa	40	2.3%	59.0%
11	Conspiración	36	2.1%	61.1%
12	Conspiración para cometer asesinato	36	2.1%	63.2%
13	Comercio, Tráfico y almacenamiento ilícito	35	2.1%	65.3%
14	Abuso de Autoridad	31	1.8%	67.1%
15	Obstaculización a la acción penal	29	1.7%	68.8%
16	Obstrucción de justicia	26	1.5%	70.3%
17	Lesiones	23	1.3%	71.7%
18	Encubrimiento Propio	22	1.3%	73.0%
19	Incumplimiento de Deberes	22	1.3%	74.3%
20	Amenazas	19	1.1%	75.4%
	Otros	420	24.6%	100.0%
	<b>Suma</b>	<b>1,706</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4.3. Tipo de delitos, Juzgado Grupo C

El Juzgado C tiene 1,480 (19.7%) de los 7,531 delitos que se tienen registrados en la base de datos. En este juzgado, el 90% del total se concentra en 18 delitos y los tres principales suman el 63% de los delitos registrados, siendo estos: asociación ilícita (40%), obstrucción extorsiva de tránsito (14.3%) y asesinato (8.6%).

**Tabla 10. Cantidad de delitos en los expedientes del Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo C**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Asociación ilícita	590	39.9%	39.9%
2	Obst. Extorsiva de Tránsito	212	14.3%	54.2%
3	Asesinato	127	8.6%	62.8%
4	Conspiración para cometer asesinato	78	5.3%	68.0%
5	Extorsión	42	2.8%	70.9%
6	Lavado de Dinero	36	2.4%	73.3%
7	Secuestro	36	2.4%	75.7%
8	Robo Agravado	36	2.4%	78.2%
9	Asesinato en Grado de Tentativa	34	2.3%	80.5%
10	Fraude	27	1.8%	82.3%
11	Conspiración para cometer robo agravado	22	1.5%	83.8%
12	Encubrimiento Propio	21	1.4%	85.2%
13	Comercio, Tráfico y almacenamiento ilícito	14	0.9%	86.1%
14	Estafa Propia	12	0.8%	87.0%
15	Tenencia ilegal de armas de fuego	12	0.8%	87.8%
16	Transporte y/o Traslado Ilegal de Armas de Fuego	12	0.8%	88.6%
17	Asociaciones delictivas	10	0.7%	89.3%
18	Obstruccion de justicia	10	0.7%	89.9%
	Otros	149	10.1%	100.0%
	<b>Suma</b>	<b>1,480</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4.4. Tipo de delitos, Juzgado Grupo D

El Juzgado D tiene 815 (10.8%) de los 7,531 delitos que se tienen registrados en la base de datos. En este juzgado, el 84% del total se concentra en 20 delitos y los 10 principales suman el 66% de los delitos registrados (dos de cada tres), siendo los primeros cinco: asociación ilícita (19.4%), lavado de dinero (11.2%), abuso de autoridad (5.8%), fraude (5.6%) y peculado (5.4%).

**Tabla 11. Cantidad de delitos en los expedientes del Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo D**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Asociación ilícita	158	19.4%	19.4%
2	Lavado de Dinero	91	11.2%	30.6%
3	Abuso de Autoridad	47	5.8%	36.3%
4	Fraude	46	5.6%	42.0%
5	Peculado	44	5.4%	47.4%
6	Colusión	40	4.9%	52.3%
7	Malversación	40	4.9%	57.2%
8	Incendio	28	3.4%	60.6%
9	Asesinato	25	3.1%	63.7%
10	Allanamiento	23	2.8%	66.5%
11	Tráfico ilícito de personas	22	2.7%	69.2%
12	Cohecho Activo	18	2.2%	71.4%
13	Robo Agravado	17	2.1%	73.5%
14	Amenazas	14	1.7%	75.2%
15	Instigación a Delinquir	14	1.7%	76.9%
16	Asesinato en Grado de Tentativa	13	1.6%	78.5%
17	Conspiración para cometer asesinato	12	1.5%	80.0%
18	Estafa Propia	12	1.5%	81.5%
19	Secuestro	10	1.2%	82.7%
20	Hurto	9	1.1%	83.8%
	Otros	132	16.2%	100.0%
	<b>Suma</b>	<b>815</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4.5. Tipo de delitos, Juzgado Grupo E

El Juzgado E, por ser el de más reciente creación, tiene solo 229 (3%) de los 7,531 delitos que se tienen registrados en la base de datos. En este juzgado, la totalidad de delitos son 23. El 75% del total se concentra en siete delitos y los tres principales suman el 47% de los delitos registrados, siendo estos: asociación ilícita (24.9%), allanamiento (11.4%) y conspiración para el lavado de dinero (10.5%).

**Tabla 12. Cantidad de delitos en los expedientes del Juzgado de Mayor Riesgo, Grupo E**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Asociación Ilícita	57	24.9%	24.9%
2	Allanamiento	26	11.4%	36.2%
3	Conspiración para el lavado de dinero	24	10.5%	46.7%
4	Robo Agravado	23	10.0%	56.8%
5	Conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito	16	7.0%	63.8%
6	Abuso de Autoridad	15	6.6%	70.3%
7	Comercio, Tráfico y almacenamiento ilícito	11	4.8%	75.1%
	Otros	57	24.9%	100.0%
	<b>Suma</b>	<b>229</b>		

Fuente: CIDEJ, 2019.

#### 4.4.6. Tipo de delitos, Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango

El Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango tiene 587 (7.8%) de los 7,531 delitos que se tienen registrados en la base de datos. En este juzgado, el 91% del total se concentra en 18 delitos y los siete principales suman el 66% de los delitos registrados (dos de cada tres), siendo los primeros cinco: extorsión (19.4%), asociación ilícita (17.2%), obstrucción extorsiva de tránsito (7%), lavado de dinero (6.8%) y fraude (4.8%).

**Tabla 13. Cantidad de delitos en los expedientes del Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango**

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
1	Extorsión	126	21.5%	21.5%
2	Asociación Ilícita	101	17.2%	38.7%
3	Obst. Extorsiva de Tránsito	41	7.0%	45.7%
4	Lavado de Dinero	40	6.8%	52.5%
5	Fraude	28	4.8%	57.2%
6	Apropiación y Retención Indebidas	26	4.4%	61.7%

No.	Delito	Cantidad	%	% Acum.
7	Encubrimiento Propio	26	4.4%	66.1%
8	Casos Especiales de Estafa	21	3.6%	69.7%
9	Asociaciones delictivas	19	3.2%	72.9%
10	Asesinato	16	2.7%	75.6%
11	Cohecho Pasivo	14	2.4%	78.0%
12	Abuso de Autoridad	13	2.2%	80.2%
13	Malversación	13	2.2%	82.5%
14	Conspiración para cometer asesinato	11	1.9%	84.3%
15	Conspiración	10	1.7%	86.0%
16	Conspiración para cometer robo agravado	10	1.7%	87.7%
17	Conspiración para cometer plagio o secuestro	9	1.5%	89.3%
18	Estafa Propia	8	1.4%	90.6%

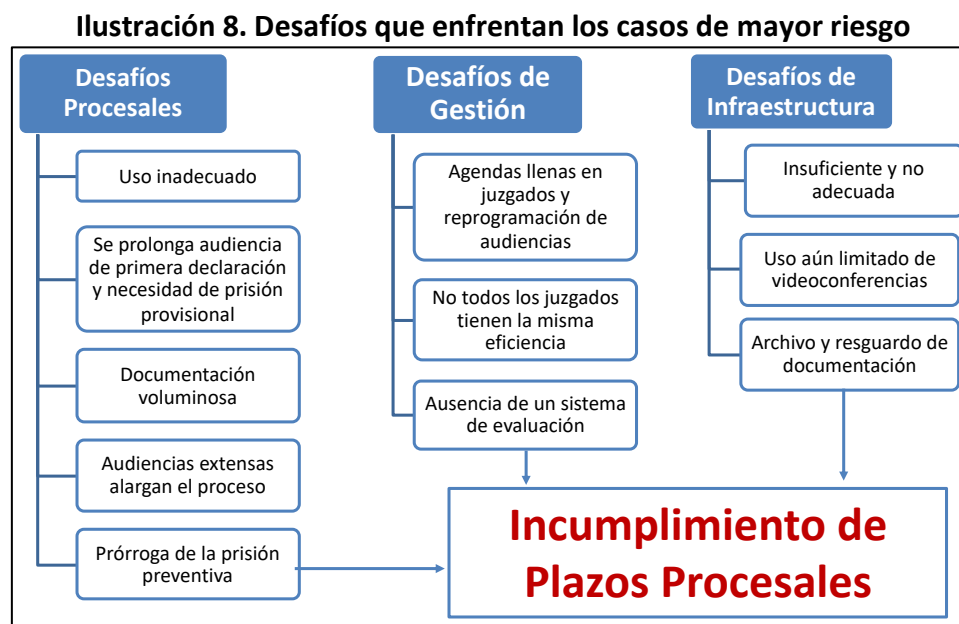
Fuente: CIDEJ, 2019.

De las tablas 7 a la 13 se puede concluir que:

- El delito más recurrente es el de asociación ilícita (28%).
- Los nueve delitos más recurrentes son relacionados a delincuencia organizada (60%).
- Los Juzgados A, E, y de Quetzaltenango de Mayor Riesgo tienen principalmente delitos relacionados a delincuencia organizada.
- El Juzgado B de Mayor Riesgo tiene proporcionalmente más delitos relacionados con corrupción que los demás juzgados (cohecho activo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, etc.) y menos delitos de crimen organizado como obstrucción extorsiva de tránsito y portación y tenencia ilegal de armas de fuego.
- El Juzgado C de Mayor Riesgo tiene principalmente delitos relacionados con delincuencia organizada (obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato, extorsión, etc.). Además, este juzgado junto al de Quetzaltenango tiene mucho más concentrado el tipo de delitos en comparación con los demás (ambos concentran en 18 delitos alrededor del 90% del total). De todos los juzgados, en este el delito de asociación ilícita es el que tiene la mayor proporción (40%).
- El Juzgado D de Mayor Riesgo tiene entre los principales tanto delitos de delincuencia organizada como de corrupción. En todos los juzgados, el delito de asociación ilícita es el que tiene la mayor proporción respecto al total, aunque en este juzgado es la segunda proporción más baja (19%) después del de Quetzaltenango (17%).

## 5. Aspectos de los procesos de mayor riesgo

Por la naturaleza de los casos de mayor riesgo, muchos son casos complejos y enfrentan una serie de retos específicos durante el proceso judicial. En la Ilustración 8 se hace un resumen de estos retos en forma gráfica y posteriormente se describen con mayor detalle.



Fuente: CIEN, elaboración propia.

### Desafíos procesales:

1. No siempre se usa la competencia de mayor riesgo adecuadamente.
2. Si la cantidad de imputados es elevada, la audiencia de primera declaración se prolonga usualmente y los sindicados pasan un tiempo considerable en prisión provisional, antes de que su situación esté resuelta.
3. Los casos llevan una documentación investigativa y procesal muy voluminosa, lo cual dificulta a la defensa y al juez prepararse debidamente.
4. Por la cantidad de imputados, delitos y medios de prueba, las audiencias pueden ser muy extensas y alargan el proceso penal.
5. Se tiene que prorrogar la prisión preventiva múltiples veces por la larga duración del proceso.

### Desafíos de gestión:

1. La saturación de los juzgados provoca agendas llenas, las cuales deben ser reprogramadas por audiencias que se cancelen o alargan, así como audiencias imprevistas o recursos interpuestos.
2. No todos los juzgados son administrados con la misma eficiencia y en la práctica no existe un sistema de evaluación de los mismos.

#### **Desafíos de infraestructura:**

1. La infraestructura física de los juzgados no siempre es suficiente para atender a la cantidad de sindicados de un mismo caso.
2. Las opciones de audiencias por videoconferencias aún son limitadas.
3. Hay escasez de espacio para archivar documentación y resguardar información.

A continuación, se abordan algunos de estos aspectos de manera más detallada.

### **5.1. Uso de la competencia de mayor riesgo**

Desde que existe la competencia de mayor riesgo, la misma ha sido utilizada cada año con mayor frecuencia. Resalta el año 2014 durante el cual ingresó la mayor cantidad de casos en estos juzgados (Ver Tabla 2). El motivo primordial para pedir la competencia especial debe siempre ser motivado por el tema del resguardo de la seguridad personal de los sujetos procesales. A parte de esto, existen otros incentivos de las fiscalías para pedir la competencia de mayor riesgo:

1. **Familiarización con la delincuencia organizada de parte de los jueces:** Debido a que los jueces manejan muchos casos de delincuencia organizada, los fiscales prefieren litigar sus casos en estos juzgados, porque la experiencia les da un mejor entendimiento de las estructuras criminales y sus modus operandi.<sup>36</sup>
2. **Mayor posibilidad de lograr prisión preventiva para el sindicado:** Debido a los casos delicados que se manejan en los juzgados de mayor riesgo, hay una mayor probabilidad de que la petición de prisión preventiva para el sindicado sea otorgada, no solamente por los delitos que no permiten medida sustitutiva, sino en general.<sup>37</sup>

A parte de lo señalado anteriormente, se ha podido observar una práctica particular en varios casos que se litigan en competencia de mayor riesgo:

1. **En casos de extorsiones: Vinculación de todos los sindicados a una estructura.** En casos de extorsiones que giran alrededor de una estructura principal, usualmente una pandilla, las personas que colaboran nada más, sin ser parte de la estructura, suelen ser parte del mismo caso de la estructura. Debido a esta práctica se explica porque dichos casos suelen tener una cantidad muy elevada de sindicados, a pesar de que no todos son realmente parte de la estructura medular.

Explicación de esa práctica:<sup>38</sup> La fiscalía trata los casos de esta manera, porque de lo contrario existen problemas para la definición de las competencias jurisdiccionales, no solo entre procesos de mayor riesgo y procesos ordinarios, sino también las

<sup>36</sup> Entrevista con un fiscal, septiembre 2019 y entrevista con un fiscal, noviembre 2019.

<sup>37</sup> *Ibíd.*; ver Tabla 5.

<sup>38</sup> Entrevista con un ex fiscal, noviembre 2019.

competencias geográficas, ya que los delitos pueden ocurrir en varios puntos del país<sup>39</sup>. Esto dificultaría enormemente llevar a cabo dichos procesos, ya que se tendrían que llevar en distintos juzgados, lo cual requiere que los fiscales viajen a los departamentos a cubrir diferentes audiencias, mientras que litigarlo como un solo caso en un mismo juzgado lleva la ventaja de que el juez conozca el caso completo y no solo una parte del mismo. Sin embargo, para un sindicado puede ser una desventaja, ya que forma parte de un gran caso que avanza lento por la elevada cantidad de sindicados.

2. **En casos de corrupción: llevar varios casos dentro de un caso original.** En los casos de redes de corrupción, se ha visto la práctica de iniciar con un caso principal, y si surgen nuevos hallazgos que permiten formar un nuevo caso, este segundo caso se trata como una fase II del caso original. Sin embargo, este segundo caso puede implicar personas diferentes y otros delitos. Así existen casos que tienen hasta tres fases.<sup>40</sup>

Explicación de esta práctica:<sup>41</sup> Al igual como en el caso de extorsiones, se quiere evitar la problemática de la competencia jurisdiccional en todo el país, lo cual dificultaría una adecuada litigación de los casos en diferentes juzgados. Además, en estos casos se suma otro aspecto importante: como los siguientes casos se desprenden del primer caso, al tratarlos juntos en el mismo juzgado, se asegura que el juez tiene todo el historial y los antecedentes del primer caso que es la base de los siguientes casos. De lo contrario habría que explicar estos antecedentes complejos ante cada juzgado que lleva uno de los casos derivados del primero, lo cual puede ser muy tardado y complicado.

Si bien se pueden entender las motivaciones de litigar casos de esta manera, no se puede obviar que al trabajar un caso como la continuación de otro caso o nueva fase del primer caso, se evita tener que solicitar nuevamente la competencia de mayor riesgo para el segundo caso, ya que el primer caso ya la tiene aprobada. Razón por la cual existen casos que se trabajan en juzgados de mayor riesgo que, si fueran tratados como un caso separado, se litigarían en juzgados ordinarios por no cumplir los requisitos de la competencia especial.

---

<sup>39</sup> En los casos de extorsión, las llamadas se pueden realizar desde una ciudad pero el pago se realiza en otra ciudad y si son distintas víctimas de extorsión, cada una puede estar ubicada en diferente lugar, lo cual puede provocar diferentes juzgados competentes.

<sup>40</sup> Un ejemplo de esta práctica es el caso La Línea – TCQ – Cooptación del Estado. Si bien se trata de tres casos diferentes, los casos TCQ y Cooptación del Estado se manejan como fases del primer caso. Lo mismo pasó con el caso Construcción y Corrupción, del cual existe la fase I y II, y del cual también se desprendió el caso de financiamiento electoral ilícito al partido FCN.

<sup>41</sup> Entrevista con ex fiscal, noviembre 2019.

## 5.2. Prisión provisional

El CPP de Guatemala establece como única medida de coerción privativa de libertad la prisión preventiva. Es decir, es la única figura legal que permite recluir a una persona sindicada de un delito durante el proceso penal y antes de tener una sentencia firme. Sin embargo, en el 2015 esta situación empezó a cambiar, cuando bajo el liderazgo del Juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala, se ordenó prisión provisional para los sindicatos en el caso La Línea y se les envió a un centro de detención preventiva.

*“Esta es únicamente prisión provisional y no preventiva”*<sup>42</sup> dijo el Juez Gálvez, tras explicar que el expresidente Otto Pérez Molina sería trasladado a las instalaciones del centro carcelario preventivo Matamoros, a la espera de su audiencia de primera declaración, con el fin de dilucidar su situación legal. Puesto que no existe un fundamento legal para la prisión provisional en el CPP, la declaración citada generó abundantes dudas al respecto. A pesar de todo esto, el uso de la figura de la prisión provisional se ha hecho frecuente en los casos de mayor riesgo y en otros casos complejos con un número grande de sindicatos.

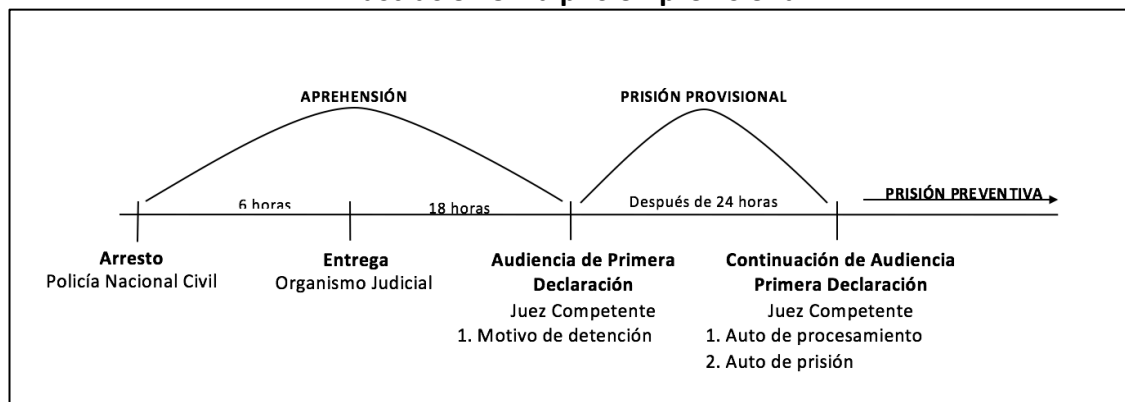
En años previos a 2015 los términos de prisión preventiva y prisión provisional se usaron como sinónimos, situación ejemplificada inclusive en el artículo 10 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que: *“... Los centros de detención, arresto o prisión provisional, serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas...”* refiriéndose a la prisión preventiva. También en los medios de comunicación se usaban ambos términos para la prisión preventiva.

A partir de 2015 el término prisión provisional adquiere un nuevo significado: se refiere al tiempo que un sindicato guarda prisión después de ser arrestado hasta que termina su audiencia de primera declaración y el juez ha emitido el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva. Lo que sucede en la práctica es que la audiencia de primera declaración se divide en dos audiencias: una para informar al sindicato únicamente el motivo de su detención; y la segunda, que es la continuación, para escuchar al imputado y al ente investigador, la cual termina con el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva (o de medida sustitutiva). Esto se resume en la Ilustración 9.

---

<sup>42</sup> El Mundo, 2015.

### Ilustración 9. La prisión provisional



Fuente: CIEN, elaboración propia.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la audiencia de primera declaración tiene como finalidad resolver la situación legal del imputado en el sentido de escucharlo, hacerle saber los delitos que se le imputan y dejar resuelta su situación de medidas coercitivas, lo cual requiere que el juez emita el auto de procesamiento y el auto de prisión preventiva (o de medida sustitutiva). Sin embargo, esto no se cumple en el caso de la prisión provisional, porque el juez no resuelve la situación del imputado de manera inmediata sino hasta en la continuación de la audiencia de primera declaración, la cual puede llevarse a cabo varios días o semanas más tarde.

Esta situación genera varias dudas:

1. **Base legal de la prisión provisional:** Como fue detallado anteriormente, el Código Procesal Penal establece como única medida coercitiva privativa de libertad la prisión preventiva. La prisión provisional como tal no tiene base legal en el marco jurídico guatemalteco.
2. **Resolución que dicta prisión provisional:** En la práctica se pueden observar diferentes formas en los cuales se ordena la prisión provisional, estos varían entre los distintos juzgados. Una de esas es que el juzgado competente emita un decreto<sup>43</sup>, lo cual es una resolución de trámite; otra forma es que se emita un auto de prisión provisional o simplemente una orden de ingreso a un centro de detención.<sup>44</sup>
3. **Ubicación física para cumplir la prisión provisional:** Debido a que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Régimen Penitenciario únicamente establecen centros de prisión preventiva y centros de cumplimiento de condenas, surge la duda acerca de la infraestructura penitenciaria para la prisión provisional. En teoría dichas personas no deben mezclarse con ningún otro grupo que guarda prisión. Por tal motivo, en 2015 cuando se abrió el nuevo centro carcelario en la Brigada

<sup>43</sup> Según artículos del 141 al 143 de la Ley del Organismo Judicial.

<sup>44</sup> Entrevistas en Juzgado de Mayor Riesgo A en octubre 2018 y Juzgado de Mayor Riesgo C en octubre 2019.

Mariscal Zavala, se adaptó un área específica para los sindicatos en prisión provisional. Esta disposición quedó normada en el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 557-2015, del Ministerio de Gobernación, el cual establece que *“el centro de detención creado mediante el acuerdo ministerial... delimita el área “B”, la cual tiene una capacidad máxima de 22 detenidos, que se usa tanto para hombres como para mujeres, en forma separada y la misma es exclusivamente para la reclusión de aquellas personas que se encuentran pendientes de prestar su primera declaración ante el órgano jurisdiccional competente y éste decida su situación legal procesal”*.<sup>45</sup>

Sin embargo, según información obtenida de la Dirección General del Sistema Penitenciario, por el mismo hacinamiento en el centro penal de Mariscal Zavala, dichos espacios son usados para personas en prisión preventiva.<sup>46</sup> Los sindicatos en prisión provisional son enviados al centro de detención preventiva que más se adapte a su perfil<sup>47</sup>, ya que el Sistema Penitenciario no diferencia entre prisión preventiva y prisión provisional.

- 4. Duración de la prisión provisional:** La prisión provisional puede durar unos días o varias semanas, eso depende de diversos factores. Es importante diferenciar tres casos de prisión provisional:
- a) La audiencia de primera declaración no se puede realizar en un solo día, por la cantidad elevada de imputados, lo cual significa que la misma durará varios días o semanas en lo que termina. Los sindicatos deben permanecer en prisión provisional en lo que termina la audiencia.
  - b) La audiencia de primera declaración no se puede realizar de inmediato, porque los sindicatos vienen de diferentes partes del país y deben ser trasladados primero al Juzgado de la capital. Los sindicatos deben permanecer en prisión provisional en lo que todas las personas estén presentes en el Juzgado.
  - c) La audiencia de primera declaración no se puede realizar de inmediato, porque no hay disponibilidad de parte del Juzgado competente por tener otras audiencias agendadas. Los sindicatos deben permanecer en prisión provisional en lo que se agenda la audiencia.

Si bien en algunos casos se hace difícil evitar la prisión provisional, como cuando hay pluralidad de sindicatos, es importante buscar una mejor manera de llevar a cabo la audiencia de primera declaración lo antes posible para no violar el plazo constitucional. En

---

<sup>45</sup> Acuerdo Ministerial 557-2015 del Ministerio de Gobernación, artículo 2.

<sup>46</sup> Según vocero de la Dirección General del Sistema Penitenciario, el 12 de noviembre de 2018. Misma información recibida de parte de defensores del IDPP. La misma situación se presenta a noviembre de 2019.

<sup>47</sup> Preventivo para varones z.18; Centro preventivo Mariscal Zavala, pero en cualquier sector; y Centro Preventivo para mujeres Santa Teresa z. 18.

vista de que habrá más casos complejos que llegaran a los juzgados, es importante que el Organismo Judicial se prepare para manejar este tipo de caso con la mayor diligencia posible.

### 5.3. Prisión preventiva

No existen datos acerca de la duración de los procesos de mayor riesgo, ni del tiempo que pasan los sindicados de casos de mayor riesgo en prisión preventiva. Según los datos mostrados en el capítulo 4 (Ver Tabla 5), el 75% de los acusados recibe prisión preventiva en la audiencia de primera declaración llevada a cabo en Juzgados de Mayor Riesgo. Sin embargo, eso no significa que necesariamente pasará en dicha condición todo el tiempo que dure su proceso penal. Se ha visto que se otorgan medidas sustitutivas conforme vaya avanzando el proceso penal aún en los casos mediáticos, dependiendo de la variación de las circunstancias iniciales.

La ley guatemalteca tiene la particularidad que según el artículo 268 la prisión preventiva finaliza, entre otras razones, cuando su duración exceda un año. Sin embargo, en el siguiente párrafo del artículo se menciona que la prisión preventiva se puede prorrogar cuántas veces sea necesario.<sup>48</sup> Esta disposición legal deja cierta ambigüedad, ya que el plazo máximo es de un año, pero también se establece que se puede prorrogar cuántas veces sea necesario. Esto deja abierta la posibilidad de extender la prisión preventiva indefinidamente. Guatemala es el único país en toda Latinoamérica que tiene esa norma, ya que usualmente se limita la prisión preventiva con un plazo máximo fijo.

En el 2018 el CIEN realizó un estudio sobre la prisión preventiva<sup>49</sup>, en el cual se determinó, que de las 16,020 personas a las que se les dictó prisión preventiva en los años 2016 a 2018, en promedio pasaron o llevaban 335 días en prisión preventiva (casi un año).<sup>50</sup> El 50% de las personas (la mediana) estuvieron o llevaban 274 días o menos en prisión (9 meses).

Al realizar un histograma con datos agrupados por cada 30 días de prisión, se identificaron cinco grupos:

- 1) La mayor proporción de personas en prisión preventiva (38%) había pasado entre 61 y 240 días (más de 2 y hasta 8 meses) en esa situación.
- 2) El 22% había pasado en prisión preventiva entre 241 días y hasta 390 días (más de 8 meses y hasta un año y un mes).

---

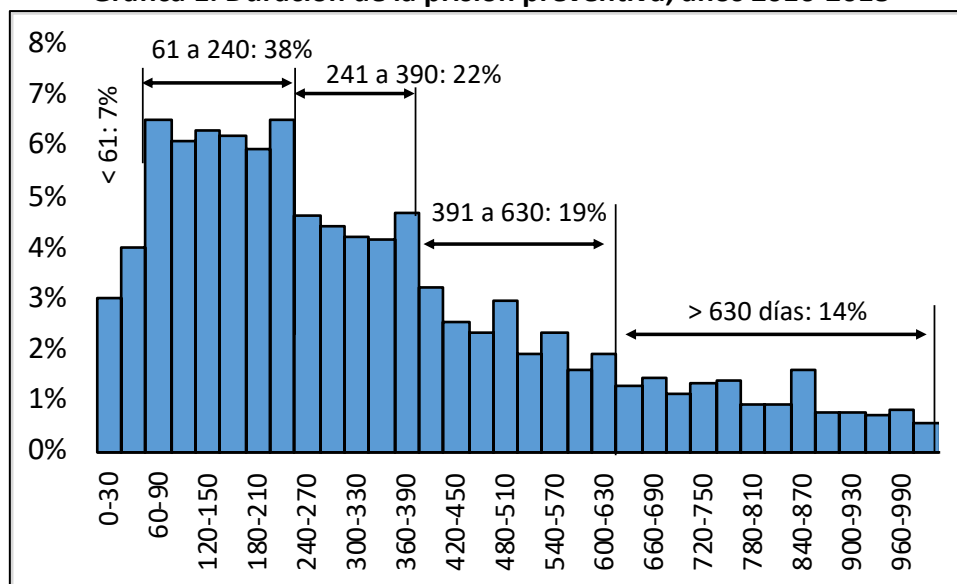
<sup>48</sup> Las Cortes de Apelaciones están a cargo de decidir las peticiones de prórroga de prisión preventiva de parte de los jueces de Paz, jueces de Instancia o Tribunales de Sentencia o del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia en los casos sometidos a su conocimiento, de oficio, o a solicitud de las Salas de la Corte de Apelaciones o del Ministerio Público.

<sup>49</sup> CIEN (2018), p. 52-54.

<sup>50</sup> En este análisis se tomaron en cuenta todos los casos a los que se les dictó prisión preventiva en los años 2016, 2017 y 2018, tanto los que ya habían salido de prisión como los que aún continuaban en esa situación.

- 3) Había un 19% que había estado entre 391 días y hasta 630 días (más de un año y un mes hasta un año y 9 meses)
- 4) El grupo que más había pasado en prisión preventiva abarcaba un 14% del total y había pasado más de 630 días (más de 1 año y 9 meses).
- 5) Solamente el 7% de las personas en prisión preventiva pasó o había pasado menos de 61 días en esa situación (2 meses).

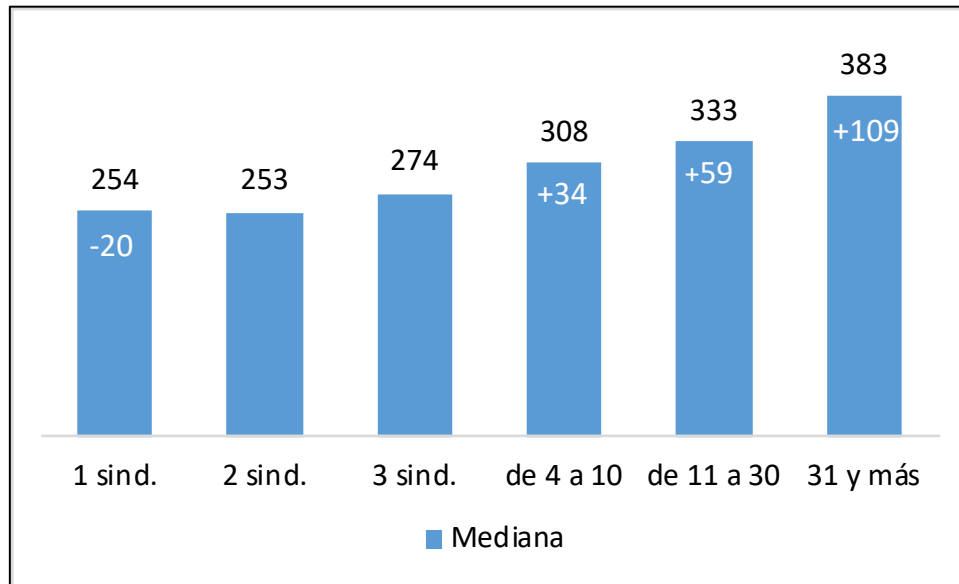
**Gráfica 1. Duración de la prisión preventiva, años 2016-2018**



Fuente: CIEN, con datos del SICOMP.

Si se toma en cuenta cómo varía la duración de la prisión preventiva según la cantidad de sindicatos, se puede ver lo siguiente: la mitad de las personas (la mediana) estuvieron durante 274 días en prisión preventiva, dato que es el mismo para los casos con 3 sindicatos. En los casos con 1 y 2 sindicatos, este periodo es aproximadamente 20 días menor; en los casos con 4 a 10 sindicatos, el plazo aumenta 34 días más, en los casos con 11 a 30 sindicatos 59 días más; y en los casos con más de 30 sindicatos, el plazo es de 109 días más que en los casos con 3 sindicatos.

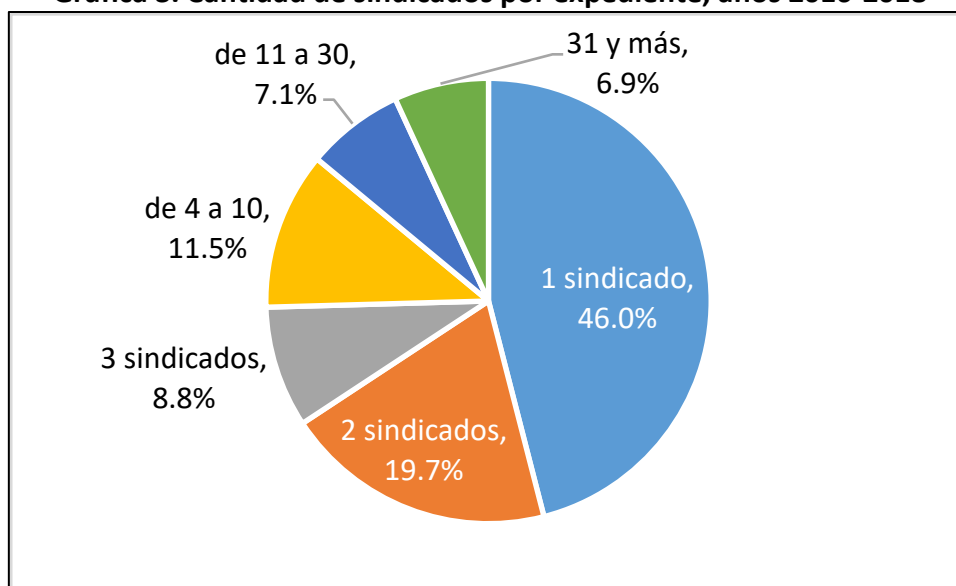
**Gráfica 2. Duración de la prisión preventiva según número de sindicatos, años 2016-2018**



Fuente: CIEN, con datos del SICOMP.

Esta diferencia de la duración de prisión preventiva según número de sindicatos por caso es de mayor relevancia para el 7% de las personas a las que se les dictó prisión preventiva y que estaban en casos con más de 30 sindicatos, y una proporción similar en casos con 11 a 30 sindicatos. La Gráfica 3 muestra que el 75% de las personas a las que se les dictó prisión preventiva, estaba en casos con 3 sindicatos o menos.<sup>51</sup>

**Gráfica 3. Cantidad de sindicatos por expediente, años 2016-2018**



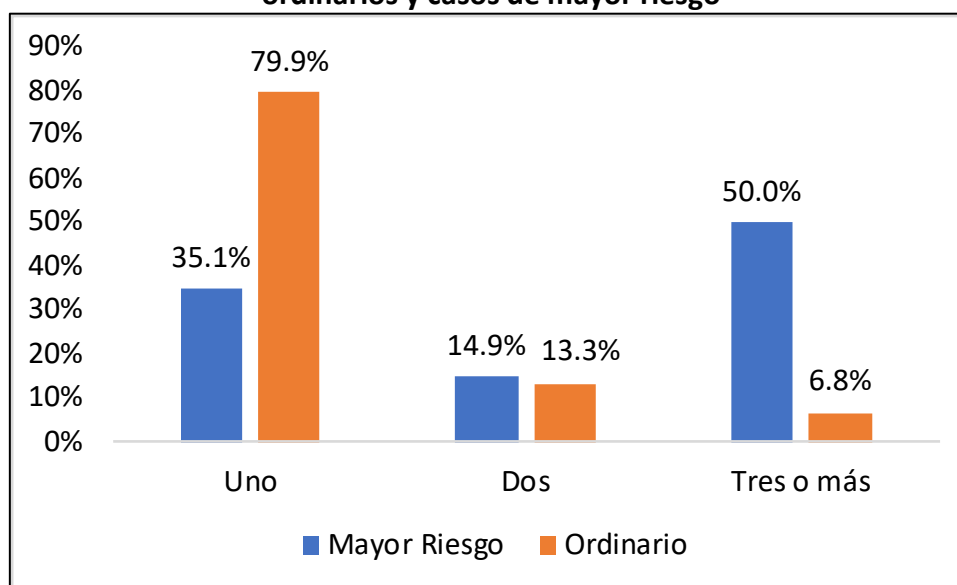
Fuente: CIEN, con datos del SICOMP.

Si la unidad de análisis se cambia de cantidad de personas a cantidad de expedientes, en el estudio de prisión preventiva en el año 2018, CIEN analizó 10,981 expedientes. Los datos mostraban que en el 93.2% de los expedientes había uno o dos sindicatos. Comparando estos datos con los de la Tabla 6 se observa que<sup>52</sup>, por lo general, en los procesos de mayor riesgo se tiene una mayor proporción de casos con más de tres sindicatos que en los demás (50% versus 7%). Ver Gráfica 4.

<sup>51</sup> No a todos los sindicatos de todos los casos se les dictó prisión preventiva. De las 16,020 personas sobre las que se hizo el análisis, había 10,981 expedientes distintos.

<sup>52</sup> No son datos estrictamente comparables porque en el estudio de la prisión preventiva se tomaron en cuenta solo los expedientes con sindicatos a los que se les había dictado prisión preventiva entre 2016 y 2018 (pudo haber expedientes en los que solo se dictó medida sustitutiva a los sindicatos pero estos no se incluían en la base de datos analizada), mientras que en el actual estudio se están tomando en cuenta los expedientes de los años 2011 a 2019 en los que se dictó solo prisión preventiva (126 de los 222), en los que se dictó solo medida sustitutiva (41 de los 222) o ambas (55 de los 222). Esto es así porque las bases de datos analizadas en uno y otro estudio obedecen a distintos fines de análisis y provienen de distintas fuentes: CIDEJ y SICOMP.

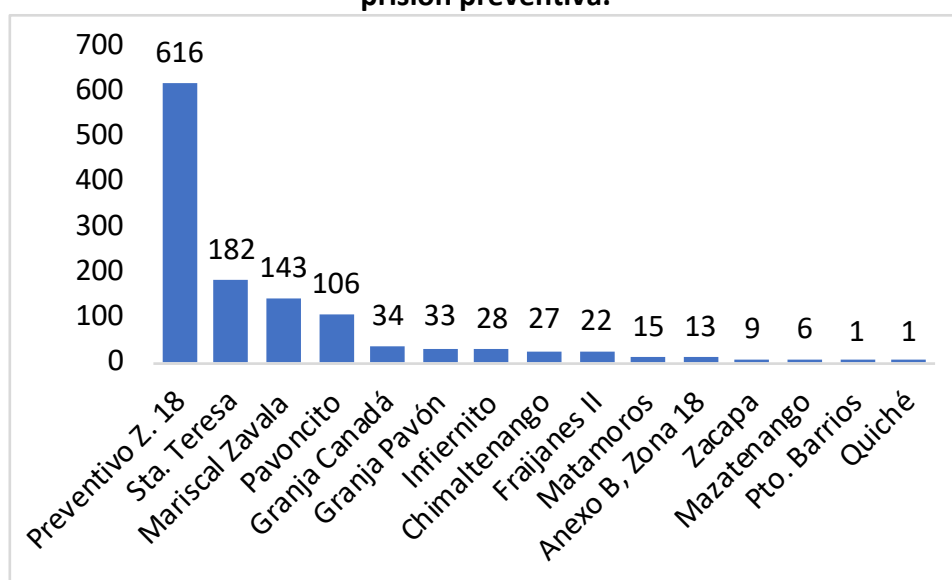
**Gráfica 4. Proporción del total de expedientes según número de sindicatos, casos ordinarios y casos de mayor riesgo**



Fuente: CIEN, con datos del SICOMP y CIDEJ.

Según los datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario –DGSP- actualmente hay alrededor de 11,700 personas en prisión preventiva. De estas, 1,236 personas están ligadas a procesos de mayor riesgo, lo cual equivale a un 11% de la población en prisión preventiva. Dichas personas están ubicadas en diferentes centros carcelarios, la mitad de ellos en el Centro Preventivo de la zona 18.

**Gráfica 5. Ubicación de las personas ligadas a procesos de mayor riesgo en prisión preventiva.**



Fuente: CIEN, elaboración propia con datos de la DGSP.

#### 5.4. Gestión de los juzgados de mayor riesgo

**Personal:** Los juzgados de mayor riesgo están organizados de la misma manera como un juzgado ordinario. Esto lo indican los acuerdos de la CSJ que crean los respectivos juzgados de mayor riesgo, refiriéndose al artículo 13 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales respecto al personal auxiliar judicial que apoya en dichas judicaturas. Los juzgados cuentan con un Secretario a cargo del despacho.

**Agenda:** La creciente cantidad de casos ha ido saturando a los juzgados de mayor riesgo, ya que a veces los casos grande avanzan de manera lenta y se acumulan con casos que ingresan nuevo. Esto implica que las agendas se vuelven cada vez más llenas y la calendarización de audiencias se vuelve complicada y tardada. Por un lado por la creciente actividad procesal en los casos, por el otro lado por la cancelación de audiencias y la necesidad de tener que reprogramarlas.

**Audiencias:** Los temas relacionados a las audiencias son múltiples y muy importantes. Primero el tema de la suspensión de las audiencias. La cancelación de audiencias tiene diferentes motivos: Según un estudio de la CICIG, la razón principal es la incomparecencia del sindicado (20%), incomparecencia del abogado defensor (15%), alargación de la audiencia anterior (15) y la incomparecencia del Ministerio Público (13%).<sup>53</sup> Llama la atención que entre las razones más frecuentes está la cancelación por una audiencia previa. Esto significa que la programación del tiempo de audiencias no se cumple pero se sigue llevando la agenda de esta manera.

Un segundo aspecto es la puntualidad del inicio de las audiencias. En otro estudio se ha determinado que en promedio las audiencias inician con una hora de atraso.<sup>54</sup> A parte de no aprovechar el tiempo agendado, estos atrasos pueden contribuir al incumplimiento de la agenda.

Debido a que las audiencias en los juzgados de mayor riesgo pueden ser muy largas, existen dos modelos de cómo llevarlas:<sup>55</sup> 1. Audiencia de un solo caso continua por varios días hasta concluirla; 2. Varias audiencias durante la semana, para avanzar en varios casos. Ambos modelos tienen ventajas y desventajas, una evaluación sistemática no existe. En los juzgados de mayor riesgo se aplican ambos modelos.

**Notificaciones y envío de expedientes:** En todos los aspectos burocráticos de los juzgados se observa mucha tardanza y atrasos. Un ejemplo son las notificaciones. Los partes procesales deben esperar varios días o semanas para recibir las notificaciones y esto suma a que los

<sup>53</sup> CICIG, USAC, URL & GIZ (2018), p. 16. En la incomparecencia del sindicado no se aclara si es por el traslado del Sistema Penitenciario u alguna otra razón.

<sup>54</sup> Impunity Watch (2019), p. 30.

<sup>55</sup> FADS (2018), p. 63.

procesos se alarguen. Se ha visto la demora de hasta tres meses en notificar decisiones de una instancia superior.<sup>56</sup> Lo mismo ocurre en caso de tener que enviar expedientes a otras instancias. Dicho trámite demora a veces semanas y causa atrasos innecesarios en los procesos.

**Ausencia de evaluación de gestión del despacho:** No existe un sistema de evaluación de la eficiencia de los diferentes despachos judiciales. Es importante establecer criterios de medición, para evaluar la eficiencia de la gestión judicial y poderla mejorar. Esto va de la mano con el tema de la evaluación contenido en la Carrera Judicial.

### 5.5. Infraestructura de los juzgados de mayor riesgo

Si bien se ha acomodado la infraestructura de los primeros juzgados de mayor riesgo en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, conforme se han creado juzgados de mayor riesgo adicionales, se ha tenido que buscar espacios para ellos. Algunos juzgados cuentan con salas de audiencias grandes, para poder atender un número elevado de sindicados. Dichas salas cuentan con detectores de metal en la entrada, algún personal de seguridad y los sindicados están ubicados atrás de rejas dentro de la sala de audiencia. Estas medidas se tomaron para cumplir con mayores medidas de seguridad por el tema de procesos de mayor riesgo.

Sin embargo, la mayoría de las personas entrevistadas señalaron que aún existen deficiencias en cuanto a seguridad. Entre estas se mencionan el tema de los elevadores que deben ser compartidos con los privados de libertad, la ausencia de un espacio de espera adecuado para la víctima, la disponibilidad de sanitarios, y el hecho que las partes procesales se cruzan en los pasillos.<sup>57</sup> En este sentido se puede observar que la infraestructura aún no es ideal para evitar riesgos de seguridad. Además de no reunir plenamente las calidades de seguridad, también falta infraestructura, como salas de audiencias que deben ser prestadas de otros juzgados, lo cual complica la planificación del uso de las mismas.

Otro tema son las audiencias por videoconferencias, que en casos de mayor riesgo pueden ser muy útiles para evitar el traslado de las personas privadas de libertad. Sin embargo, aún varios años después de haber puesto en marcha este proyecto, se encuentran obstáculos para ponerla en práctica con más frecuencia, como la escasez de equipo tecnológico y falta de coordinación con el personal que debe estar presente en las audiencias.<sup>58</sup>

Algunos juzgados cuentan con poco espacio para su funcionamiento. El personal labora en espacios reducidos y lo mismo aplica para la documentación que se maneja en cada juzgado.

---

<sup>56</sup> Human Rights Watch (2017), p. 21.

<sup>57</sup> Comentarios realizados en varias entrevistas con funcionarios que llevan casos en juzgados de mayor riesgo y comprobado en visita a los Juzgados de Mayor Riesgo. También en FADS (2018), p. 67.

<sup>58</sup> Personal del Sistema Penitenciario, Jueces de paz, Personal técnico.

## 5.6. Incumplimiento de los plazos procesales

Cada sindicato tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Por lo tanto, es importante los procesos penales de mayor riesgo se lleven a cabo de manera expedita. Sin embargo, se puede observar que en los procesos penales se incumplen los plazos procesales. Esto es un tema generalizado, pero se hace más visible en los procesos de mayor riesgo, por la pluralidad de los sindicatos que pueden atrasar el proceso, la complejidad de los casos que alarga la duración del proceso y que dichos procesos se vuelven mediáticos.

No existe información en la base de datos del OJ que nos hubieran permitido realizar un análisis más exhaustivo de este tema, pero de acuerdo a dos estudios realizados anteriormente, se puede observar lo siguiente:<sup>59</sup>

Según el Primer Informe del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal de Guatemala, en una observación realizada durante una semana de junio de 2017 en los juzgados de primera instancia de la ciudad capital, se identificaron los siguientes tres cuellos de botella en el proceso penal:

1. Desde la primera declaración hasta la audiencia de etapa intermedia la ley establece un plazo de 105 días (90 desde la audiencia de primera declaración y la presentación del acto conclusivo y 15 días desde éste hasta la audiencia de etapa intermedia), mientras que la duración real fue de 165 días, es decir, 60 días más.
2. El plazo entre la audiencia de ofrecimiento de prueba y la primera audiencia del juicio debe ser de 15 días, pero en la realidad es de 184 días, es decir, 169 días más.
3. Desde la primera audiencia del juicio hasta que se termina de redactar la sentencia hay un plazo legal de 25 días, sin embargo, en la realidad se toma 90 días, es decir, 65 días más.

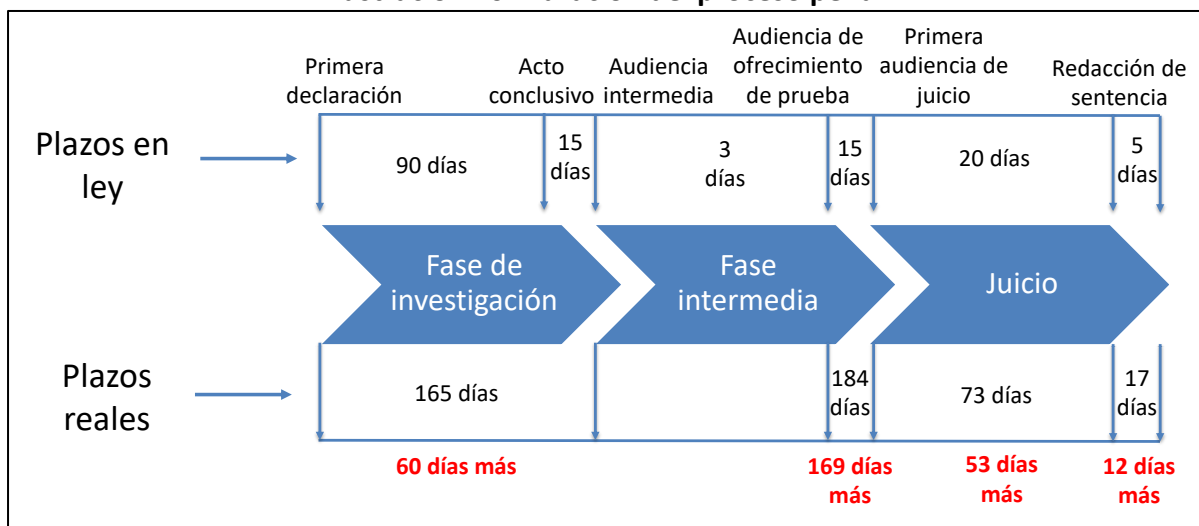
De lo que se observa, el cuello de botella más importante es el tiempo que pasa entre el fin de la fase intermedia y la primera audiencia de juicio. El estudio llegó a la conclusión, que el proceso penal tiene una duración total de 198 días (2.5 años).

En la Ilustración 10 se resume los plazos legales para cada etapa del proceso penal y los tiempos observados.

---

<sup>59</sup> Human Rights Watch (2017) y CICIG, USAC, URL & GIZ (2018).

### Ilustración 10. Duración del proceso penal



Fuente: CIEN, con base en datos del Primer Informe del Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal de Guatemala.

Además del atraso en los plazos durante un proceso penal, este se agrava si en algún momento una de las partes procesales plantea un recurso, apelación u otra impugnación.

Según el mismo estudio, en el caso de plantear una apelación genérica, esta suele durar 91 días para ser resuelta, cuando debería durar 3 días, y en el caso de una apelación especial, dura 262 días en ser resuelta en vez de los 60 que dice la ley.

Según el estudio de Human Rights Watch, en el cual se realizó un análisis minucioso de ocho casos penales para determinar las causas de los atrasos procesales, las dos impugnaciones más recurrentes son la recusación y los amparos.<sup>60</sup>

**Recusación:** La recusación es una solicitud para que el juez que lleva el caso sea apartado del mismo por falta de imparcialidad o conflicto de interés.<sup>61</sup> En el caso de la recusación, el artículo 67 del CPP establece que el juez contra el cual se presentó la recusación debe apartarse de inmediato del caso hasta que la instancia superior ha resuelto la recusación, y remitir el caso a un juez reemplazante, el cual sigue con el caso mientras tanto. Sin embargo, se observa que en la práctica casi nunca se recurre a un juez reemplazante por varias razones: el nuevo juez tomará mucho tiempo en familiarizarse con el caso, especialmente si se trata de un caso complejo, los jueces reemplazantes evitan avanzar con un proceso iniciado por otro juez, no estar de acuerdo que otro juez esté a cargo del caso.<sup>62</sup> Así que usualmente, los procesos penales quedan paralizados durante el tiempo que se decide la recusación.

<sup>60</sup> Human Rights Watch (2017), p. 14.

<sup>61</sup> *Ibíd.*, p. 13.

<sup>62</sup> Entrevista con Jueza de mayor riesgo, octubre 2019; Human Rights Watch (2017), p. 14.

Según la ley, la revisión de una recusación debe realizarse en un plazo de 5 días hábiles, sin embargo en la práctica estas revisiones demoran por lo menos dos meses. Este hecho se vuelve particularmente crítico, si se presentan varias recusaciones durante el mismo proceso.<sup>63</sup>

**Amparo:** El amparo es un instrumento legal que brinda protección cuando los derechos de una persona hayan sido o pueden ser coartados por una autoridad. La protección se amplía a prácticamente cualquier acto u omisión de alguna autoridad y puede ser presentada contra cualquier acto o decisión de un juez durante el proceso penal, y la instancia superior debe resolverlo.<sup>64</sup> El amparo suspende el proceso penal únicamente si el tribunal otorga amparo provisional hasta tomar la decisión definitiva.

Las acciones de amparo deben ser resueltas en un plazo de un mes o menos, pero en la práctica los tribunales demoran de seis a doce meses.<sup>65</sup> Se puede observar que no se logra cumplir con los plazos establecidos, lo cual se agrava aún más, si se presenta otro amparo para impugnar la decisión del primero, cuyo trámite demora usualmente un año.

Además, de este incumplimiento se suman las demoras de las notificaciones y la reprogramación de audiencias. El hecho del incumplimiento de los plazos procesales puede ser aprovechado para atrasar el proceso penal a propósito.

---

<sup>63</sup> Caso Bufete de la Impunidad en el cual se presentaron cinco recusaciones que estancaron el proceso por más de un año. Human Rights Watch (2017), p. 19.

<sup>64</sup> Human Rights Watch (2017), p. 8.

<sup>65</sup> *Ibíd.*, p. 4.

## 6. Procesos de mayor riesgo en Latinoamérica

El tema de los procesos de mayor riesgo y de casos complejos es una evolución relativamente reciente en Latinoamérica. La firma de la Convención de Palermo en el 2000 ha comprometido a los países firmantes a ajustar sus legislaciones e incorporar nuevas herramientas. Si se hace un comparativo acerca de cuándo datan los cambios legales, se puede observar que fue una evolución similar en muchos países del continente. También se puede ver que México es un país de excepción en el sentido que ya contó con una legislación contra la delincuencia organizada mucho antes que varios de los demás países.

**Ilustración 11. Línea de tiempo en la aprobación de legislación para el combate a la delincuencia organizada en países latinoamericanos**



Fuente: CIEN, elaboración propia.

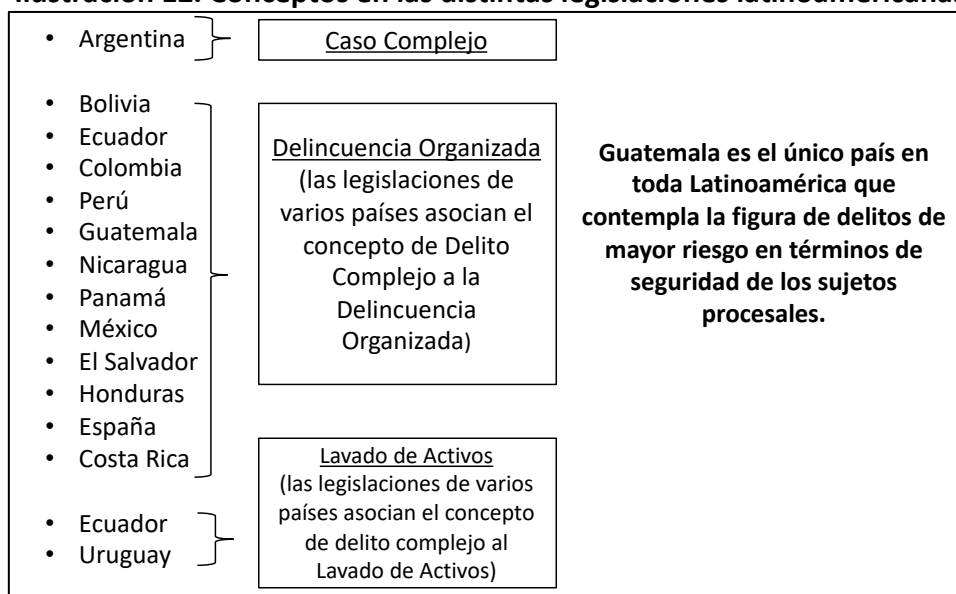
## 6.1. Benchmark de la legislación

Una comparación de las diferentes legislaciones en Latinoamérica acerca de los casos complejos tiene como finalidad explorar las características, similitudes y diferencias de las legislaciones de 16 países, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- Delitos o Casos complejos:** Si la legislación contempla el concepto de casos complejos y en caso que así sea, de qué forma.
- Proceso Penal:** Si existen disposiciones procesales especializadas para casos complejos o se aplica el derecho procesal ordinario. Para tal efecto se denomina ordinario el Código Procesal Penal y especializado la aplicación de medidas procesales estipuladas en leyes especiales.

A continuación, se presenta un resumen de los hallazgos derivados de la información obtenida en el Benchmark sobre las legislaciones latinoamericanas. (Ver Anexo 1 para información completa).

**Ilustración 12. Conceptos en las distintas legislaciones latinoamericanas**



Fuente: CIEN, elaboración propia.

Se puede observar que el único país que ha introducido el término de caso complejo en su legislación es Argentina. La gran mayoría de países ha introducido el concepto de caso complejo en su legislación asociado a la delincuencia organizada. Sin embargo, no existe ningún otro país además de Guatemala que use el término de mayor riesgo para calificar un caso.

Revisando si los países latinoamericanos optaron por tener una legislación especial para casos complejos o si se aplica el derecho procesal ordinario, se puede observar varios países tienen regulaciones procesales específicos para los casos complejos, especialmente relacionadas con el período de investigación la duración de la prisión preventiva:

**Tabla 14. Comparación de legislación especial para casos complejos a nivel latinoamericano**

País	Prolongación de plazo de investigación para casos complejos	Prolongación del plazo de Prisión Preventiva para casos complejos
<b>Costa Rica</b>	24 meses adicionales	24 meses adicionales
<b>Bolivia</b>	18 meses adicionales	
<b>México</b>	12 meses adicionales	de 6 meses a 24 meses adicionales
<b>Colombia</b>	9 meses adicionales	de 36 meses a 48 meses adicionales
<b>España</b>	6 meses adicionales	24 meses adicionales
<b>Perú</b>	2 meses adicionales	18 meses adicionales

Fuente: CIEN, elaboración propia.

Los países de El Salvador, Uruguay, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala optaron por aplicar las disposiciones procesales ordinarias. Sin embargo, en el caso de Guatemala existe una particularidad respecto a la prisión preventiva, ya que la misma puede ser prorrogada cuantas veces sea necesaria según el artículo 268 del CPP, caso único en Latinoamérica con esta regulación. Por lo mismo no es necesario tener una disposición particular respecto a la prisión preventiva para los casos complejos, como se ha realizado en otros países.

## 6.2. Juzgados especializados

En Latinoamérica hay muy pocos países que hasta la fecha implementaron juzgados y tribunales especializados para casos complejos o de delincuencia organizada exclusivamente. El país vecino El Salvador es uno de ellos. En el 2006, la justicia salvadoreña puso en marcha lo relativo a la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja. La ley adopta la definición de delincuencia organizada que establece la Convención de Palermo, con la diferencia que se considera suficiente dos o más personas, artículo que fue modificado en 2018 para establecer tres o más personas.<sup>66</sup> La misma ley define los delitos de realización

<sup>66</sup> Dictamen favorable Comisión de legislación y puntos constitucionales, Asamblea Legislativa, Dictamen 5, de fecha 19 de julio de 2018.

compleja como “... Que haya sido realizado por dos o más personas, que la acción recaiga sobre dos o más víctimas, o que su perpetración provoque alarma o conmoción social.”, aplicando para los delitos de robo simple o agravado, secuestro y extorsión.

Para el juzgamiento de esos delitos, los legisladores dispusieron en el artículo 3 de la Ley, la creación de Tribunales Especializados en las ciudades de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Dichos Tribunales se organizaron de la siguiente manera: Juzgados Especializados de Instrucción, Tribunales Especializados de Sentencia y Cámaras Especializadas de lo Penal.

A diferencia de los juzgados ordinarios, cuentan con personal de protección para el resguardo de los jueces y salas de juzgado acomodadas con áreas adicionales como por ejemplo carceletas o salas de videoconferencia, a manera de disminuir el riesgo de violencia.<sup>67</sup>

Estos tribunales especializados principalmente se ocupan de casos asociados a pandillas, los cuales en su mayoría implican una alta cantidad de sindicados, recientemente se llevó a cabo un proceso en contra de 400 sindicados.<sup>68</sup> Esto es un problema, por que crea excesivas cargas de trabajo e imposibilita la labor judicial en lo relacionado al cumplimiento de los plazos y criterios que garantizan un juicio justo.<sup>69</sup> Según los datos de la Unidad de Información y Estadísticas de la Corte, entre enero de 2014 y diciembre de 2017, los juzgados especializados recibieron 1,954 procesos: 817 en Instrucción y 1,147 en Sentencia.<sup>70</sup> Solo el Juzgado Especializado B de San Salvador atendió 419 casos en este tiempo, en promedio 100 casos anuales.

La carga excesiva de trabajo derivó en marzo del 2018 en que el Juzgado Especializado B de San Salvador entrara en paro de labores.<sup>71</sup> Por eso, un mes después el Congreso Salvadoreño aprobó la creación del Juzgado Especializado C. Pese a ello, el nuevo juzgado también se declaró en paro el primer día de sus labores, porque ellos recibirán una carga de trabajo excesiva al tener que atender todos los casos nuevos durante los primeros seis meses para descongestionar a los otros dos juzgados. Además se liberó una disputa salarial de los trabajadores de este nuevo Juzgado C.<sup>72</sup>

La alta carga de trabajo de la sede en San Salvador resulta por dos razones:

- La competencia geográfica de las tres sedes jurisdiccionales influye en la cantidad de expedientes, ya que la sede de San Salvador maneja más casos que las otras dos. Por un lado porque cubre una mayor cantidad de departamentos, por el otro lado porque la ciudad de San Salvador registra una alta cantidad de incidentes delincuenciales.

---

<sup>67</sup> WOLA (2019), p. 18.

<sup>68</sup> CNN en español (2019).

<sup>69</sup> Luna S., (2018).

<sup>70</sup> *Ibíd.*

<sup>71</sup> Vásquez, (2018).

<sup>72</sup> Luna J., (2018).

Además, la Fiscalía a veces prefiere judicializar algunos casos en San Salvador, aunque los delitos no hayan sido cometidos en esta jurisdicción.<sup>73</sup>

- Había un mal uso de la competencia especializada por parte de la Fiscalía, y se presentaron casos ante ello que se podían judicializar ante juzgados ordinarios. En el 2011, la Sala de lo Constitucional aclaró en una sentencia que dichos juzgados y tribunales únicamente deben atender casos relacionados con la delincuencia organizada. Desde este momento, se redujo la cantidad de casos, sin embargo, el mayor reto sigue siendo la cantidad alta de sindicados por cada caso.<sup>74</sup>

Los retos asociados al funcionamiento y conceptualización de los Juzgados Especializados inclusive provocaron que en el 2018, la Comisión de Legislación evaluara la posibilidad de eliminarlos, lo cual no sucedió.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Luna S., (2018).

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> CNN en español, (2019)

## 7. Conclusiones

---

1. **La figura de Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo como en Guatemala es única en todo Latinoamérica.** Eso en parte por el catálogo de delitos que se consideran de mayor riesgo, que se pueden agrupar en tres categorías distintas y por el otro lado, porque se priorizó el tema de la seguridad personal, sin embargo no se incorporó el concepto de los casos complejos, que conllevan una serie de particularidades y desafíos.
2. **El uso de la competencia de Mayor Riesgo se da por varias razones, no únicamente por seguridad personal.** Si bien la ley requiere un riesgo de seguridad personal para los sujetos procesales para poder otorgar la competencia de mayor riesgo, también existen otros incentivos para pedir dicha competencia especializada. Existen incentivos procesales, como por ejemplo lograr una única competencia procesal en un caso grande o un mayor conocimiento de la materia de parte de los jueces, que no obedecen estrictamente al tema de riesgo personal.
3. **La prisión provisional se ha vuelto una práctica recurrente debido a la complejidad de los casos.** Las agendas saturadas en los juzgados, la planificación deficiente y el alto número de sindicados han provocado esta situación. Sin embargo, hay que reconocer que la prisión provisional no tiene base legal. Además, no existen espacios adecuados en el Sistema Penitenciario para albergar a las personas en prisión provisional, ya que ellos no debieran ser mezclados con el resto de la población reclusa.
4. **La prisión preventiva es más probable en casos de mayor riesgo y se vuelve más larga mientras más sindicados hay en el caso.** Esto se puede dar por el tipo de delitos que se manejan en juzgados de mayor riesgo, ya que varios de estos forman parte del artículo 264 del Código Procesal Penal, y no pueden recibir medidas sustitutivas. También se puede observar que mientras más sindicados tiene un caso, mayor tiempo pasan en prisión preventiva. Los datos muestran que en los Juzgados de Mayor Riesgo hay más cantidad de casos con 3 o más sindicados que en juzgados ordinarios.
5. **Existen serios desafíos en la gestión de los juzgados.** La administración de cada juzgado varía y está a criterio del mismo juez y su secretario. Se pueden observar diferencias en el manejo de agenda, manejo de audiencias, tiempos de notificación y atención a las personas que tramitan algún asunto. Otros estudios que se han realizado indican que la burocracia es lenta y alarga los procesos judiciales, lo cual es importante para ubicar los cuellos de botella y procurar una mayor eficiencia de cada juzgado. Actualmente no existe un sistema para medir la eficiencia de los juzgados.
6. **Aún existen grandes retos en la recopilación y sistematización de los datos judiciales.** El sistema estadístico que maneja el OJ no permite recolectar la información que es necesaria para lograr una óptima planificación.

7. **El OJ no está preparado para atender el aumento de casos, en particular los casos complejos.** A lo largo de los últimos años, los casos de mayor riesgo han aumentado a raíz de la implementación de la Ley contra la Delincuencia Organizada y la persecución penal estratégica en contra de estructuras criminales. La evolución de la delincuencia pedía cambiar el modelo de persecución y este también cambia la manera de impartir justicia. La carga en los juzgados de mayor riesgo se ha vuelto mayor, ya que los casos que ingresaron nuevos se han ido acumulando con los casos anteriores que avanzan lentamente. Debido a esto, cuentan con una agenda saturada, la cual complica la planificación de audiencias, y aún más si estas son imprevistas o deben ser reprogramadas. Además, se puede observar que no toda la infraestructura existente es adecuada para manejar casos complejos con más de tres sindicados, porque estos requieren salas de audiencias grandes, lugar para documentación voluminosa y personal de apoyo para el juez, necesidades que no varían entre un juzgado ordinario y uno de mayor riesgo.

## 8. Recomendaciones

---

### Corto Plazo:

1. **Emitir lineamientos para la gestión de despachos judiciales por parte de la CSJ para una mejora continua.** Debido a los desafíos de administración de los despachos judiciales, se recomienda capacitar a los secretarios en temas de organización y administración, para eficientizar el trabajo en el despacho. También se sugiere emitir unos lineamientos básicos para sistematizar y unificar la administración de los despachos judiciales. Es necesario contar con un sistema de medición de la eficiencia, tanto del despacho como de audiencias (este debería ser parte de la Carrera Judicial).
2. **Aplicar la prisión preventiva como última medida en casos de mayor riesgo.** Como lo estipulan los instrumentos internacionales, la prisión preventiva es la última medida a tomar cuando no se pueden usar otras medidas menos graves. Eso también aplica para casos de mayor riesgo y debe ponerse en práctica siempre. Actualmente se discute en el Congreso la aprobación de la iniciativa 5564 para reformar la prisión preventiva y fortalecer el mecanismo para otorgar medidas sustitutivas. Se recomienda aprobar esta iniciativa de ley, para poder realizar cambios al marco normativo que regula la prisión preventiva, así como fortalecer las medidas sustitutivas. Lo único que debe ampliarse en la iniciativa en mención, son las disposiciones transitorias para la implementación de la reforma, a fin de evitar el colapso de los juzgados por la alta cantidad de solicitudes de revisión de medidas que es probable sean presentadas.

3. **Ampliar los conocimientos sobre delincuencia organizada de todos los jueces del ramo penal.** Se sugiere implementar capacitaciones regulares sobre el tema de delincuencia organizada, tanto a jueces de mayor riesgo como también a jueces ordinarios, para que se puedan familiarizar con los fenómenos criminales de estructuras y persecución penal estratégica. El conocimiento sobre la delincuencia organizada no debiera ser un incentivo para pedir la competencia de mayor riesgo.

#### Mediano Plazo:

4. **Optimizar la recopilación de los datos estadísticos en el sistema informático del OJ para una mejor planificación y toma de decisiones.** Se recomienda mejorar las bases de datos y la información estadística del Organismo Judicial, ya que esa información servirá de base para la planificación del crecimiento de la institución y en la gestión de los despachos judiciales. Además es importante que se le dé cumplimiento a la disposición que hace que el Sistema de Gestión de Tribunales sea de uso obligatorio para todos los juzgados, incluyendo los de mayor riesgo. La calidad de los datos recopilados debe mejorar en función de la información que se desea generar. Se debe considerar esfuerzos previos, tales como el Sistema Integrado de Justicia como una plataforma interinstitucional para coadyuvar a la mejora del sistema.
5. **Incluir el concepto de “caso complejo” en la gestión y normativa judicial.** Debido a que el concepto de mayor riesgo solo toma en cuenta el factor de seguridad, es importante cumplir con este mandato y dotar a los juzgados de mayor seguridad y su personal con las medidas necesarias. Como muchos de estos casos también son casos complejos, es importante introducir este concepto en la gestión y en la normativa judicial y adecuar a los juzgados con los recursos necesarios para poder gestionar este tipo de casos con la mayor eficiencia posible.
6. **Buscar soluciones institucionales para la prisión provisional y acabar con esta práctica.** Debido a que la prisión provisional carece de una base legal, se recomienda buscar una solución institucional a esta problemática. De momento, es importante no mezclar a las personas en prisión provisional con el resto de la población reclusa, ya que su estatus legal es diferente.

#### Largo Plazo:

7. **Realizar una planificación de ajuste de capacidades del Organismo Judicial.** La capacidad del Organismo Judicial ha sido rebasada con el aumento constante de casos que ingresan. Por lo mismo, es necesario ajustar las capacidades de la institución. Se recomienda adecuar la infraestructura y el personal para manejar casos complejos, ya

que por el desarrollo y los avances que se registran en la persecución penal estratégica, habrá más casos en el futuro. Es necesario evaluar las necesidades y prioridades para ampliar la capacidad de los juzgados ordinarios.

También, se sugiere poner en marcha medidas para descongestionar los juzgados y tribunales a través de medidas para agilizar los procesos penales. Ambas iniciativas deben complementarse (ampliación de capacidades y reducción del flujo de casos).

Por último, se debe buscar la coordinación interinstitucional para optimizar el uso de los recursos del sector para brindar una justicia pronta y cumplida.

## 9. Anexos

### 9.1. Comparativo de la legislación sobre procesos de mayor riesgo o procesos complejos

País	La legislación contempla procedimientos especiales para casos complejos	El Proceso Penal para casos complejos es ordinario o especializado	Tipificación de Caso Complejo	Periodo de investigación más largo	Prisión preventiva más amplia	Juzgados especializados	Disposición legal	Año
Argentina	Sí	Especializado	Casos complejos	No	No	No	<b>Ley 27319</b> <a href="https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27319-268004/texto">https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27319-268004/texto</a>	2016
Bolivia	Sí	Ordinario	Casos complejos, con tipificación de asociación delictuosa y organización criminal	Sí (art. 134 - título IV) hasta un plazo máximo de dieciocho 18 meses.	No	No	<b>Código Penal y Código de Procedimiento Penal</b> <a href="http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/3.-Codigo_Penal_y_Procedimiento_Penal.pdf">http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/3.-Codigo_Penal_y_Procedimiento_Penal.pdf</a>  *Proyecto de Ley Crimen Organizado/delitos transnacionales (2019)	2006
Ecuador	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación ley para reprimir el lavado de activos	No	No	No	<b>Ley para reprimir el lavado de activos</b> <a href="https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-aprobadas=All&amp;title=LEY+PARA+REPRIMIR+EL+LAVADO+DE+ACTIVOS&amp;fecha=">https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas?leyes-aprobadas=All&amp;title=LEY+PARA+REPRIMIR+EL+LAVADO+DE+ACTIVOS&amp;fecha=</a>	2010
Colombia	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados	Sí (art. 12) 9 meses	Sí (art. 307) 36 meses (Miembros de Grupos Delictivos Organizados). 48 meses (Grupos Armados Organizados)	No	<b>Ley 1908 - 2018</b> <a href="https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201908%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf">https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201908%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf</a>	2018
Perú	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de, crimen organizado.	Sí (Art 5) 1 mes	Sí (Art 272) No más de 18 meses	No	<b>Ley contra el Crimen Organizado</b> <a href="http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&amp;Db=201101803&amp;View=Código+Procesal+Penal">http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/Repexpvirt?OpenForm&amp;Db=201101803&amp;View=Código+Procesal+Penal</a> <a href="https://goo.gl/Lg497W">https://goo.gl/Lg497W</a> (Art. 272)	2013

País	La legislación contempla procedimientos especiales para casos complejos	El Proceso Penal para casos complejos es ordinario o especializado	Tipificación de Caso Complejo	Periodo de investigación más largo	Prisión preventiva más amplia	Juzgados especializados	Disposición legal	Año
Guatemala	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de, crimen organizado.	No	No	No	<b>Ley contra la Delincuencia Organizada</b> <a href="http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/10_LeyContraDelincuenciaOrganizada.pdf">http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/CDs%20compilaciones/Compilacion%20Leyes%20Penales/expedientes/10_LeyContraDelincuenciaOrganizada.pdf</a>	2006
Nicaragua	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de, crimen organizado.	No	No	No	<b>Ley de Prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados</b> <a href="http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=7350BA83A74D6B10062577F400790CDF&amp;action=openDocument">http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/xpNorma.xsp?documentId=7350BA83A74D6B10062577F400790CDF&amp;action=openDocument</a>	2010
Panamá	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de, crimen organizado.	No	No	No	<b>Ley 121-2013</b> <a href="https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/blogs.dir/cendoj/tf12o28vxd-ley-121-de-2013.pdf">https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/blogs.dir/cendoj/tf12o28vxd-ley-121-de-2013.pdf</a>	2013
México	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de crimen organizado	Sí (art 6) 24 meses	No	No	<b>Ley federal contra la delincuencia organizada DOF 07-04-2017</b> <a href="http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf">http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101_070417.pdf</a>	2017
El Salvador	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de crimen organizado	No	Sí, (Art 17) seis meses, prorrogables	Sí (Art. 6)	<b>Ley contra el crimen organizado Decreto no. 190</b> <a href="https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/88B3D14C-00BC-4703-BB8A-2B325795348B.pdf">https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/88B3D14C-00BC-4703-BB8A-2B325795348B.pdf</a> Reforma 2018 <a href="https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/4207B892-9FE9-49D6-9561-EDDA951E33F6.pdf">https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/4207B892-9FE9-49D6-9561-EDDA951E33F6.pdf</a>	2006
Honduras	Sí	Ordinario	Casos complejos, con Asociación para Delinquir y Asociación a Terrorismo	No	No	No	<b>Código Penal</b> <a href="http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2019/07/D-130-2017-CÓDIGO-PENAL-10-DE-MAYO-2019-Gaceta-34940.pdf">http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2019/07/D-130-2017-CÓDIGO-PENAL-10-DE-MAYO-2019-Gaceta-34940.pdf</a> Decreto No. 70-2015 <a href="http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2018/11/decreto-33942.pdf">http://congresonacional.hn/wp-content/uploads/2018/11/decreto-33942.pdf</a>  *En proceso de firma iniciativa de ley sobre Crimen Organizado	2015

País	La legislación contempla procedimientos especiales para casos complejos	El Proceso Penal para casos complejos es ordinario o especializado	Tipificación de Caso Complejo	Periodo de investigación más largo	Prisión preventiva más amplia	Juzgados especializados	Disposición legal	Año
España	Sí	Ordinario	Casos complejos, con tipificación de, delincuencia organizada	Sí, (Artículo 282 bis) 6 meses prorrogables (investigación encubierta)	Sí, (Art 504) una sola prórroga de hasta dos años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años, o de hasta seis meses si el delito tuviera señalada pena igual o inferior a tres años.	No	<b>Ley de enjuiciamiento Criminal</b> <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&amp;b=317&amp;tn=1&amp;p=20151006#a282bis">https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036&amp;b=317&amp;tn=1&amp;p=20151006#a282bis</a>	2010
Costa Rica	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de, crimen organizado	Sí (Art. 2) 24 meses	Sí (art 7 y art 9) 24 meses con posibilidad de prórroga de 12 meses	No	<b>Ley Contra la Delincuencia Organizada (8754)</b> <a href="http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx">http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx</a>	2009
Uruguay	Sí	Especializado	Casos complejos, con tipificación de lavado de activos y terrorismo	No	Sí (Art 62.3) el tribunal competente lo estipula, en un periodo de hasta dos años	Sí (Art. 414) Ley No. 18.362	<b>Ley de control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo</b> <a href="https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18494&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=10-10-2016&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=11-10-2019&amp;Ltemas=&amp;tipoBusqueda=T&amp;Searchtext=">https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18494&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=10-10-2016&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=11-10-2019&amp;Ltemas=&amp;tipoBusqueda=T&amp;Searchtext=</a>  <b>Ley de Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestaria</b> <a href="https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18362&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=10-10-2000&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=11">https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18362&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=10-10-2000&amp;Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=11</a>	2009

Fuente: elaboración propia.

## 10. Bibliografía

---

### Documentos

1. Baquix, José Felipe (2012). ***“Derecho Procesal Penal Guatemalteco Etapas preparatoria e intermedia”***. Guatemala, octubre de 2012.
2. Castillo González, Jorge Mario (2015). ***“Constitución Política de la República de Guatemala”***. 9ª edición. Guatemala, 2015.
3. Centro de Estudios de Justicia de las Américas –CEJA- (2013). ***“Persecución de delitos complejos: experiencias en la investigación criminal”***. Santiago de Chile, abril de 2013.
4. Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- (2018). ***“La prisión preventiva en Guatemala”***. Guatemala, noviembre de 2018.
5. Cetina, Gustavo (2005). ***“Estructura del Proceso Penal en Manual de Derecho Procesal Penal II”***. 2ª edición. Guatemala, enero de 2005.
6. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- (2019). ***“El legado de justicia en Guatemala. Informe de cierre”***. Guatemala, 2019.
7. Comisión Internacional de Juristas (2016). ***“Buenas prácticas y resultados de la justicia especializada en femicidio y mayor riesgo”***. Ginebra, 2016.
8. CICIG, USAC, URL & GIZ (2018). ***“Sistema de justicia penal en Guatemala: un proyecto en proceso”***. Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala. Guatemala, octubre de 2018.
9. Familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro –FADS- y Madres Angustiadas (2017). ***“Casos complejos: un análisis de los retos jurídicos e institucionales en el sistema de mayor riesgo, sinopsis del informe”***. Guatemala, 2017.
10. Fundación Myrna Mack (2005). ***“Las dificultades para administrar la justicia en un contexto de reconstrucción de paz y de violencia política: el caso de Guatemala”***. Guatemala, 2005.
11. Fundación para el debido proceso legal (2007). ***“Controles y desconroles e la corrupción judicial”***. Washington, 2007.
12. Herrera Ramírez, Eva Rocio (2018). ***“Caso Sepur Zarco y el uso del testimonio como prueba fundamental”***. Revista Sistemas Judiciales 05/2018, p. 135-145. Guatemala, 2018.

13. Human Rights Watch (2017). ***“Carrera contra el tiempo. Cómo el poder judicial en Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”***. Washington, 2017.
14. Impunity Watch (2019). ***“Jueces en mayor riesgo. Amenazas a la independencia judicial en Guatemala”***. Guatemala, 2019.
15. La Rota, Miguel Emilio & Bernal, Carolina (2012). Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad –DeJuSticia-. ***“Experiencias de los países de América Latina en la investigación de delitos complejos”***. Bogotá, abril de 2012.
16. Monterroso Castillo (2008). ***“Investigación Criminal”***. Segunda edición. Guatemala, Octubre de 2008.
17. Soriano, Juan Pablo (2014). ***“Gobernanza global contra la delincuencia transnacional: La UE y la convención de Palermo”***. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, no. 108, p. 141-163. Diciembre de 2014.
18. Vásquez López, Luis (2018). ***“Código Penal y Código Procesal Penal, edición concordada, anotada y con explicación de motivos”***. 1ª edición. Guatemala, mayo de 2018.

#### **Legislación y otros documentos legales**

1. Constitución Política de la República de Guatemala, 1985.
2. Decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal.
3. Decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley contra la Delincuencia Organizada.
4. Decreto 17-2009 del Congreso de la República, Ley del Fortalecimiento de la Persecución Penal.
5. Decreto 21-2009 del Congreso de la República, Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo.
6. Decreto 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial.
7. Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia: 28-2006, 6-2009, 30-2009, 12-2011, 31-2012, 10-2015, 15-2016, 1-2017, 73-2018, 2-2019.
8. Organización de las Naciones Unidas –ONU- (2000). ***Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos”***. Palermo, 2000.

### Artículos y consultas en línea

1. Barrientos, Miguel (2018). ***“Juan Carlos Monzón explica cómo el Partido Patriota fue financiado de forma ilícita”***. Prensa Libre, 30 de abril de 2018. Consultado en: <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juan-carlos-monzon-audiencia-cooptacion-del-estado-mp-cicig/>
2. CNN en español (2019). ***“Más de 400 presuntos pandilleros enfrentan un juicio en El Salvador”***. CNN en español, 10 de octubre de 2019. Consultado en : <https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/10/alerta-mas-de-400-presuntos-pandilleros-enfrentan-un-juicio-en-el-salvador/%20%20https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50014428>
3. El Mundo (2015). ***“Prisión provisional para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina”***. El Mundo, 4 de septiembre de 2015. Consultado en: <https://www.elmundo.es/internacional/2015/09/04/55e8d4d5ca4741bc2a8b45a5.html>
4. Luna, Jorge. (2018). ***“Juzgado especializado C de San Salvador en paro de labores en su primer día de funciones”***. La noticia SV, 20 de agosto de 2018. Consultado en: <https://lanoticiasv.com/juzgado-especializado-c-de-san-salvador-en-paro-de-labores-en-su-primer-dia-de-funciones>
5. Luna, Stanley. (2018). ***“Las detenciones masivas saturan los juzgados especializados”***. ElSalvador.com, 8 de septiembre de 2018. Consultado en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/las-detenciones-masivas-saturan-los-juzgados-especializados/516881/2018/>
6. Sandoval Mendiola, Juan. ***“La lucha contra la delincuencia organizada transnacional en las Américas: liderazgo de México en la OEA”***. Revista mexicana de política exterior. Consultado en: <https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n78/sandoval.pdf>
7. Vásquez, Juan Carlos (2019). ***“Juzgados especializados saturados de procesos contra grupos de pandillas”***. El Mundo, 22 de abril 2019. Consultado en: <https://elmundo.sv/juzgados-especializados-saturados-de-procesos-contragrupos-de-pandillas/>
8. WOLA Advocacy for Human Rights in the Americas - VIUDOP. (2019). ***“El sistema de justicia en El Salvador”***. El Salvador, Agosto 2019. Consultado en: <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/09/8.14-SV-Justicia-ESP.pdf>